

C.A. de Santiago

Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil veinticuatro.

**Vistos:**

En los autos RIT 416-2023 del Segundo Tribunal de Juicio Oral de Santiago, se dictó sentencia definitiva el diecisiete de julio del año en curso en la que por decisión de mayoría se absolvió a **Claudio Fernando Crespo Guzmán**, de las respectivas acusaciones formuladas en su contra por el Ministerio Público y las tres partes querellantes, como presunto autor de los delitos consumados de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves o en concurso ideal de lesiones graves o de torturas con lesiones graves gravísimas; del delito de detención ilegal y del delito de obstrucción a la investigación y de falsificación de instrumento público en concurso medial con el delito de obstrucción a la investigación, todos supuestamente cometidos por Claudio Fernando Crespo Guzmán, los dos primeros en la persona de Ettien Gutiérrez Arias, con fecha 30 de marzo del 2018 en la comuna de Huechuraba de esta ciudad.

En contra de la referida sentencia se dedujeron los siguientes recursos de nulidad:

1. El de los abogados FRANCISCO LEDEZMA CERDA y XIMENA CHONG CAMPUSANO, Fiscales Adjuntos de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte en representación del Ministerio Público.
2. El del abogado MARCELO CHANDÍA PEÑA, Abogado Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, Corporación de Derecho Público, en representación de dicho Consejo.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XUXEXQVMSSX

3. El del abogado SEBASTIAN ALONSO VELÁSQUEZ DÍAZ, en representación de la víctima querellante y acusador particular, don Ettien Paolo Gutiérrez Arias.
4. El de la abogada BEATRIZ CONTRERAS REYES, Jefa Regional Metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en representación de esa parte querellante.

Todos estos recursos fueron declarados admisibles y se procedió a su vista en la audiencia del día martes 3 de septiembre último, oportunidad en que alegaron todos los abogados recurrentes por cada uno de sus representados y el abogado defensor.

En la audiencia de rigor, se abordó en primer término las pruebas ofrecidas por tres recurrentes para acreditar las causales de nulidad.

Se decidió lo siguiente:

En relación a las pistas de audio ofrecidas por los recurrentes Ministerio Público, Instituto Nacional de Derechos Humanos y Consejo de Defensa del Estado, se acordó estar a las transcripciones que en relación a dichos audios hizo cada una de las partes en sus respectivos recursos, estando todos los intervinientes contestes en que ello fuera así. Se consultó si alguno discrepaba de la transcripción, sin embargo ofrecida la palabra, no hubo oposición a ello.

En relación a las pruebas documentales, se dispuso su aceptación en formato material, en la medida que el respectivo interviniente la acompañara en su alegato e hiciera referencia precisa a la prueba. De esta forma solo rindió prueba documental durante el alegato respectivo el Ministerio Público y la parte querellante particular que representa a la víctima.



Se fijó como fecha para la lectura de la sentencia la audiencia del día de hoy.

**Considerando:**

1º) Que previo al análisis de los correspondientes recursos de nulidad, es preciso establecer los siguientes aspectos relevantes:

A. **De las acusaciones:** Que en términos generales, todas las acusaciones tanto del Ministerio Público como de los querellantes particulares son del siguiente tenor:

“Al 30 de Marzo del año 2018 el imputado CLAUDIO FERNANDO CRESPO GUZMÁN se desempeñaba como COMISARIO de la 40° Comisaría de FF.EE, teniendo en ese entonces el grado de MAYOR de CARABINEROS.

Con ocasión del denominado “Día del Joven Combatiente” y de acuerdo a la PLANIFICACIÓN de los SERVICIOS prevista para ese día, hablamos del 29 de Marzo de 2018, al MAYOR CRESPO le correspondió asumir labores de CONTROL de ORDEN PÚBLICO en la comuna de PEDRO AGUIRRE CERDA, recibiendo, alrededor de las 01:00 horas AM, de la madrugada, del día 30 de Marzo de 2018, la INSTRUCCIÓN de TRASLADARSE a la COMUNA de HUECHURABA, toda vez que se registraban diversos focos de desórdenes públicos, constituidos por BARRICADAS y lanzamiento de OBJETOS CONTUNDENTES.

Al lugar referido el IMPUTADO llega a bordo del VEHÍCULO TÁCTICO o PTR (patrulla táctica de reacción), identificada como J-031, el que era CONDUCIDO por el entonces SARGENTO SEGUNDO CLAUDIO ALEXIS PADILLA MEDINA, y en el que iban como acompañantes los, a esa época, Cabos Segundos CRISTIÁN ANDRÉS MACHUCA LOBOS y DIEGO ENRIQUE SANDOVAL ORELLANA.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XUXEXQVMSSX

De los 4 funcionarios mencionados, sólo CLAUDIO FERNANDO CRESPO GUZMÁN, recibe como material de CARGO FISCAL, para el correspondiente Servicio, la ESCOPETA MARCA HATSAN modelo ESCORT N° de serie 412128, y munición menos letal del calibre .12 mm.

Por su parte la VÍCTIMA ETTIEN PAOLO GUTIÉRREZ ARIAS, estuvo el 30 de Marzo de 2018, entre las 01:00 a 02:30 horas de la madrugada, junto a otros terceros, tomando parte en manifestaciones en la comuna de HUECHURABA, específicamente en las CERCANÍAS del EDIFICIO que alberga a la MUNICIPALIDAD de esa COMUNA, y en particular en la intersección de las calles REPÚBLICA de PANAMÁ con REPÚBLICA de BRASIL. Al comenzar a retirarse del lugar, específicamente en calle REPÚBLICA de PANAMÁ con CAMINO EL BOSQUE, la víctima junto a un tercero, don NICOLÁS LÓPEZ HERNÁNDEZ, observa un VEHÍCULO tipo ZORRILLO de CARABINEROS cruzado en DIAGONAL en la calzada (el que resulta ser el VEHÍCULO J-031), por lo que decide pasar corriendo por el lado DERECHO del referido MOVIL, y al llegar a la altura del tercio delantero del mismo, escucha un disparo, y recibe en su CARA, BOCA y CUELLO, el IMPACTO de 11 de los 12 PERDIGONES o postas contenidos en el cartucho utilizado por una ESCOPETA ANTIDISTIRBIOS.

Por su parte NICOLÁS LÓPEZ HERNÁNDEZ, fue interceptado por el COSTADO IZQUIERDO del VEHÍCULO, por UNO de sus OCUPANTES, quién con un GOLPE de PIE en su espalda lo hace caer para REDUCIRLO, MOMENTO



en el que (estando ya reducido) ESCUCHA el DISPARO descrito.

Este DISPARO, fue realizado, por el IMPUTADO CLAUDIO FERNANDO CRESPO GUZMÁN desde la TRONERA ubicada en la PUERTA del VEHÍCULO J-031, con VISTA, de acuerdo al ANGULO de DISPARO establecido, hacia el afectado.

Si bien en el SECTOR el ALUMBRADO PÚBLICO se encontraba CORTADO, el poste ubicado precisamente en la esquina ya mencionada y a unos diez metros de la víctima, se encontraba encendido.

El disparo se realiza a una distancia de entre 1 y 5 metros, pudiendo fijarse esta en los 3 +- 0.5 metros, de forma DIRECTA al rostro de la víctima.

Asimismo, al MOMENTO de EFECTUARSE, NI el DISPOSITIVO TÁCTICO, NI sus OCUPANTES, NI OTROS DISPOSITIVOS de CARABINEROS, NI miembros de la población civil se encontraban en RIESGO INMINENTE.

Cabe indicar que a la época de los hechos, regían los PROTOCOLOS para el MANTENIMIENTO del ORDEN PÚBLICO de 25 de Julio de 2014, cuyo numeral 2.16 regulaba el EMPLEO de la ESCOPETA ANTIDISTURBIOS, indicándose que:



1	Su empleo deberá ser consecuencia de una aplicación necesaria, legal, proporcional y progresiva de los medios y cuando el efecto de otros elementos tales como agua, gases y otros resulten insuficientes
2	El usuario debidamente calificado verificará que el tipo de cartuchos a utilizar sean los que correspondan para el uso antidisturbios, tanto en la parte legal como reglamentaria, debiendo tener éstos munición de goma, asimismo será él quien deba utilizar, manipular, cargar y descargar dicho armamento.
3	Se debe considerar en todo momento aspectos como la distancia entre el tirador y la muchedumbre, las características del lugar (abiertos, cerrados, pasajes, calles, etc.), o si en la muchedumbre se encuentran participando menores, mujeres o ancianos.
4	En el evento de tomar conocimiento de haberse ocasionado una lesión a una persona, se procederá lo antes posible a prestar asistencia al afectado, dar cuenta al mando, adoptar el procedimiento policial que amerite, dando a conocer si corresponde el decálogo del detenido.

Es del caso mencionar que bajo las circunstancias DESCRITAS, el DISPARO NO se dirige a MUCHEDUMBRE alguna sino contra el afectado.

El uso de la ESCOPETA ANTIDISTURBIOS se regulaba además por la CIRCULAR N° 001756 de 13 de Marzo de 2013, del General Director de Carabineros, previéndose su UTILIZACIÓN para NIVEL 4 de AGRESIÓN ACTIVA, esto es:

*Nivel 4 de agresión activa:* el controlado intenta lesionar al Carabinero para resistir el control o evadirlo. La amenaza no pone en riesgo vidas. Ejemplo: el controlado cierra sus puños para agredir o intenta golpear al Carabinero con un objeto.

Dichas CIRCUNSTANCIAS componentes del NIVEL 4 de RESISTENCIA, NO concurren en la especie.

PRODUCTO del IMPACTO de los PERDIGONES recibidos, el afectado resultó con LESIONES GRAVES, consistentes en FRACTURA DE PISO DE ÓRBITA IZQUIERDA con alojamiento de bala la que produce DEFORMIDAD en el



rostro, múltiples lesiones en hemicara izquierda, zona cervical izquierda, fractura en la pieza dental 33 con presencia de elemento extraño incrustado, todas las que tardaron en sanar más de 30 días, dejando además cicatrices permanentes.

Al advertir la LESIÓN de la VÍCTIMA, CRESPO GUZMÁN junto a su TRIPULACIÓN, TOMA DETENIDO al afectado, aprehensión material que se produce, como ya se indicó en la intersección calle REPÚBLICA de PANAMÁ con CAMINO EL BOSQUE.

De acuerdo a PARTE de DETENIDOS N° 1457 de 30 de Marzo de 2018, de la 54° Comisaría de Carabineros de Huechuraba, y a la DECLARACIÓN como APREHENSOR de CLAUDIO CRESPO GUZMÁN, el junto a su equipo se harían encontrado en las DEPENDENCIAS del EDIFICIO CONSISTORIAL de la MUNICIPALIDAD de HUECHURABA, lugar dónde observó un GRUPO de INDIVIDUOS que hicieron un FORADO e intentaban INGRESAR a sus DEPENDENCIAS (específicamente en la intersección de calles TRIGAL con ESTADOS UNIDOS), recibiendo en ESE LUGAR elementos contundentes y escuchando disparos, por lo que EN ESE LUGAR y BAJO esas CIRCUNSTANCIAS, hizo USO del ARMAMENTO. Lo que RESULTÓ ser FALSO.

Al mismo tiempo, de acuerdo a dicho parte policial y DECLARACIÓN, la VÍCTIMA así como NICOLÁS LÓPEZ HERNÁNDEZ habría estado participando de los desórdenes, EN la PARTE POSTERIOR del MUNICIPIO, huyendo del lugar producto de las técnicas disuasivas, siendo ALCANZADO ETTIENNE GUTIÉRREZ ARIAS por



CRESPO GUZMÁN, a UNA CUADRA del LUGAR, donde es DETENIDO, advirtiendo el OFICIAL DE CARABINEROS en ese momento sus LESIONES, lo cual igualmente resulta ser FALSO”.

Que a juicio del Ministerio Público, los hechos descritos son constitutivos de **un delito consumado de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves, del artículo 150 D del Código Penal**, delito cometido el 30 de marzo del año 2018 en la comuna de Huechuraba, en perjuicio de don Ettien Paolo Gutiérrez Arias; un delito consumado de **detención ilegal del artículo 148 del Código Penal**, delito cometido el 30 de marzo del año 2018 en la comuna de Huechuraba, en perjuicio de don Ettien Paolo Gutiérrez Arias y un delito consumado de **obstrucción a la investigación del artículo 269 bis del Código Penal**, delito cometido el 30 de marzo del año 2018 en la comuna de Huechuraba, delitos que se encuentran en grado de desarrollo consumado, correspondiéndole al acusado participación en calidad de **autor**, conforme lo dispone el artículo 15 N° 1 del Código Penal.

Que a juicio del Ministerio Público, respecto del acusado **Claudio Fernando Crespo Guzmán**, concurre la circunstancia modificatoria de responsabilidad penal del artículo 11 N° 6 del Código Penal.

Que el Ministerio Público, atendido el grado de desarrollo de los tres delitos por los que se formula acusación, la concurrencia de una única atenuante y la mayor extensión del mal causado, solicita imponer al acusado Claudio Fernando Crespo Guzmán las siguientes penas, junto a las





accesorias del grado pertinente, y con expresa condena en costas:

a. Como autor de un delito consumado de apremios ilegítimos del artículo 150 D del Código Penal, la pena de **3 años de presidio menor en su grado medio**.

b. Como autor de un delito consumado de detención ilegal del artículo 148 del Código Penal, la pena de **2 años de reclusión menor en su grado medio**.

c. Como autor de un delito consumado de obstrucción a la investigación del Artículo 269 bis del Código Penal, la pena de **300 días de presidio menor en su grado mínimo.**”

**B. De la función de esta Corte ante un recurso de nulidad:**

Que es importante recordar que los recursos de nulidad se sustentan en causales específicas que ha dispuesto el legislador, de manera que a eso va dirigida la revisión, es decir, a determinar si concurren o no las causales o vicios que los intervinientes formulen en contra de la decisión del respectivo tribunal. Es por eso que en el Mensaje del Ejecutivo relativo a la reforma procesal penal se sostuvo, en materia de recursos, que lo que el proyecto proponía implicaba un cambio radical en el sistema de controles de la actividad de los jueces penales y ello porque planteó un conjunto mucho más complejo de órganos y de relaciones entre ellos en el nivel de la instancia general, en la que el sistema de controles de la actuación de cada uno de los funcionarios públicos que intervienen está dado por la intervención de los otros en las distintas etapas de procedimiento. Se sostuvo así, que los cambios más importantes se referían a la apelación y a la consulta y se indicó que “no resultan compatibles con el nuevo sistema”-.



Se recalcó que la vigencia de un sistema oral requiere que el fundamento fáctico de la sentencia provenga de la apreciación directa de las pruebas que los jueces obtienen en el juicio y se añadió que por eso la revisión por parte de jueces que no han asistido al juicio y que toman conocimiento de él por medio de actas, lo priva de su centralidad. Estas reflexiones, se consideran oportunas, para relevar el control que corresponde hacer a esta Corte bajo la óptica de nulidad.

- c. **Forma de análisis de los recursos:** Se analizará por separado cada uno de los recursos de nulidad, sin perjuicio que, de ser necesario, pueda hacerse referencia a lo razonado a propósito de cada uno de ellos en los restantes para evitar repeticiones innecesarias.

Se deja constancia además que para las referencias al fallo se utilizará el formato en PDF acompañado por el Ministerio Público que contiene la numeración de páginas, dada la dificultad de hacerlo de otro modo por la extensión de cada considerando.

D. **Contexto general:** A modo de contexto genérico, resulta útil recordar que en términos generales los hechos ocurrieron el día 30 de marzo de 2018, con ocasión del denominado “día del joven combatiente”, en que el acusado se desempeñaba como oficial de Carabineros de Chile en la comuna de Huechuraba, recibiendo la víctima un disparo de 11 perdigones o postas de una escopeta antidisturbios que disparó el imputado. En cada una de las acusaciones se hizo una serie de precisiones y que condujeron a que los hechos fueran calificados como delitos de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves, detención ilegal y obstrucción a la investigación.



**I. En cuanto al recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público.**

**2°)** Que como se adelantó los fiscales adjuntos Francisco Ledezma y Ximena Chong, en representación del Ministerio Público, sostuvieron que la sentencia dictada incurre en cuatro causales de nulidad, que interpusieron una en subsidio de la otra, siendo todas ellas sustentadas en el motivo absoluto de nulidad del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, según se pasa a detallar a continuación.

**A. De la causal principal**

**3°)** Que el Ministerio Público invoca como causal de nulidad principal la del artículo 374 letra e) en relación al artículo 342 y 297 todos del Código Procesal Penal. En concreto, se afirma que el fallo infringió el principio lógico de no contradicción, desde que la decisión de absolución se funda, por un parte en que lo acontecido fue un hecho accidental y, por ende, penalmente irrelevante o atípico para luego reconocer que en este caso concurre la eximente de responsabilidad del artículo 10 N° 6 del Código Penal, esto es, legítima defensa, para cuyo presupuesto debe existir un hecho típico.

Explica que una sentencia no puede contener dos tesis contradictorias y enseguida reproduce partes de los fundamentos de ella, así sostiene que en la página 226 el tribunal sostuvo que el disparo a corta distancia se produjo de manera accidental y que Claudio Crespo sí estaba autorizado para disparar la escopeta antidisturbios en esos momentos dadas las circunstancias existentes; luego, en la página 320 se indica que la víctima fue impactada en su rostro, quien justo en ese momento pasó corriendo por el costado derecho del referido móvil con una bandana que cubría parte de su rostro y además se encontraba la



luminaria artificial cortada; y después, en la página 330 referir que las probanzas no fueron suficientes para haber acreditado la versión de la víctima y de Nicolás López (testigo) y que existieron antecedentes plausibles para acreditar la versión del acusado Crespo, agregando que habiéndose acreditado dicha dinámica, el acusado debía ser absuelto por concurrir la eximente especial del artículo 10 N° 6 del Código Penal, estando plenamente justificado el disparo con la escopeta antidisturbios, siendo un accidente que justamente Ettien Gutiérrez se cruzara en la línea de fuego, habiéndose también producido la detención de la víctima de manera legal y confeccionado el parte acorde a lo sucedido esa noche, descartando así la acusación.

Refiere enseguida, que los presupuestos de la legítima defensa suponen un hecho típico que se justifica precisamente por la legítima defensa por lo que el hecho no resulta entonces antijurídico. Así considera que la conclusión podía ser que se trató de un accidente, es decir, que no se obró con dolo directo ni eventual o que se cometió un hecho típico pero amparado por una causal de justificación, pero la utilización conjunta de ambos argumentos constituye una contradicción insalvable que incumple los mandatos del artículo 342 letra c) y d) en relación al artículo 297 del Código Procesal Penal, por cuanto importa la adopción de posiciones contradictorias o incompatibles, que impiden su reproducción.

**4°)** Que en cuanto al perjuicio sostiene que al tratarse de un motivo absoluto de nulidad, este se presume, pero además indica que el fallo adolece de incoherencia interna que lo vicia y por ello solicita que se anule la sentencia y el juicio oral y se determine el estado en que debe quedar el procedimiento, ordenando que un tribunal no inhabilitado disponga la realización de un nuevo juicio.



5º) Que, como se sabe, la causal en estudio busca corroborar que el razonamiento del tribunal al resolver se ajuste a los parámetros que le impone la sana crítica, que para el caso concreto, consiste en que los argumentos que se dan no sean contradictorios porque de ser así, evidentemente se atenta a un principio de la lógica que conduce a la nulidad de la decisión.

Pues bien, el impugnante atribuye el razonamiento contradictorio de la sentencia al establecerse que la conducta del imputado fue un hecho accidental, para luego decir que operó la causal de justificación denominada legítima defensa, siendo ambos argumentos incompatibles.

6º) Que revisada la sentencia, ha de descartarse una infracción al principio de contradicción como el que se denuncia.

En efecto, el juicio discurrió básicamente sobre dos hipótesis en cuanto a la dinámica y lugar de los hechos siendo ello relevante para determinar primero si el disparo que efectuó el acusado fue o no justificado.

La sentencia analizó en forma extensa toda la prueba rendida y, para los efectos que interesa a esta causal, concluyó que el disparo que realizó el acusado estaba justificado.

Así en las páginas 324 y 325 establece:

*“...se acreditó que esa noche Claudio Crespo era Mayor de Carabineros y estaba en acto de servicio cuando disparó la escopeta antidisturbios, como funcionario de Fuerzas Especiales en la comuna de Huechuraba, tratando de controlar el orden público a raíz de los graves desmanes y actos delictuales por el día del Joven Combatiente en la madrugada del 30 de marzo del 2018 en la comuna de Huechuraba, por tanto, su actuación se enmarcó dentro de su cargo o con motivo u ocasión del*



*cumplimiento de funciones de resguardo de orden público y seguridad pública interior.*

*En este sentido, Claudio Crespo al haber utilizado la escopeta antidisturbios de cargo fiscal que tenía asignada y disparar por la tronera ante la presencia de disparos en el lugar, direccionando la escopeta hacia el lugar en que provenían los disparos –estando así facultado por los respectivos protocolos de Carabineros-, repelió o impidió una agresión que podría haber afectado gravemente la integridad física o vida de un tercero, en este caso, de alguno de los funcionarios de infantería de la sección 19 que se encontraban más atrás, no habiéndose acreditado en juicio que Claudio Crespo estuviese en conocimiento de que Cristóbal Rivera ya les había dado la orden previa a dicha sección de que no avanzaran más, como tampoco siendo un argumento válido de que como los funcionarios andaban con sus implementos personales de seguridad, entonces jamás podrían haber sufrido en el cuerpo un impacto de bala, **utilizando para ello un arma con munición no letal en contra de un grupo de individuos que disparaban al parecer un arma de fuego hacia el J031, según lo que se pudo escuchar esa noche y que por lo demás, estuvo suficientemente acreditado que durante esa jornada dentro de los disturbios, sí existieron disparos con armas de fuego en esos instantes**, estando así Claudio Crespo exento de responsabilidad penal en las lesiones ocasionadas en el rostro de Ettien Gutiérrez, que por lo demás consideramos que en ese preciso momento la víctima se atravesó y tuvo la mala fortuna de ser impactado, no existiendo ningún tipo de dolo en la conducta de Claudio Crespo, estando justificada su conducta y por ende exento de responsabilidad penal en estos hechos según*



*ya se refirió, no habiendo cometido ningún delito.” (énfasis agregado para mayor claridad).*

Como se ve, no se trata entonces que los jueces hayan establecido que el acusado actuó en legítima defensa en relación a la víctima de este juicio, sino que, para explicar el disparo, establecieron que en forma previa a su ejecución, el vehículo policial en el cual iba el acusado estaba en un lugar en donde había disparos, por lo que el acusado utilizó la escopeta antidisturbios en esa dirección para repeler o impedir una agresión que podía afectar gravemente la integridad física o vida de un tercero, que en este caso eran alguno de los funcionarios de infantería de la sección 19 que se encontraban más atrás. En otras palabras, el fallo considera que el disparo que se efectuó por el acusado fue en legítima defensa de terceros (los otros funcionarios de Carabineros que estaban de infantería) en relación a quienes en ese lugar efectuaban disparos.

Dentro de esa dinámica, la sentencia estima que fue un hecho accidental el lesionar a la víctima Ettien Gutiérrez, pues da por acreditado “que en ese preciso momento la víctima se atravesó y tuvo la mala fortuna de ser impactado” (página 325).

**7°)** Que en conclusión, no existe en la sentencia un razonamiento incompatible pues el fallo lo que hizo fue primero dilucidar si el disparo que efectuó el acusado tenía o no justificación, concluyendo que sí, al haber actuado en legítima defensa de terceros y justificando por tanto el disparo, y conforme a esa dinámica de los hechos, las lesiones de la víctima fueron producto de un hecho accidental al atravesarse justo en el momento en que tal disparo se efectuaba.

**8°)** Que corrobora que esa fue la forma en que el tribunal abordó esclarecer la dinámica de los hechos, la circunstancia que



incluso el voto disidente, también parte de la premisa de las dos hipótesis diciendo en su segunda motivación, que hubo controversia sobre el lugar en el que acaecieron los hechos, indicando que si se demostraba que habían ocurrido en la intersección de calles que proponen las acusaciones –avenida Camino el Bosque de Santiago, con calle República de Panamá– el disparo no se encuentra justificado ya que allí no había manifestaciones, había luz eléctrica y buena parte de los funcionarios que participaron en el procedimiento lo denominaron como un “lugar seguro”. En cambio, si el disparo y la detención se produjo en el edificio consistorial de la Municipalidad de Huechuraba que se encontraba en construcción, sin luz eléctrica y con barricadas, con personas lanzando objetos contundentes en contra de Carabineros y sonidos de disparo, entonces es viable justificar el uso legal, racional y proporcional de la fuerza para proteger al personal policial que se desplazaba de infantería (página 338 y 339).

Es decir, resulta claro que el tribunal –tanto la mayoría como la disidencia– lo primero que hizo fue determinar la justificación del disparo, concluyéndose –por mayoría– que sí existió esta justificación por la concurrencia de legítima defensa en relación a agresiones de terceros y dentro de ese actuar la víctima fue lesionada en forma accidental, razonamiento que no resulta por tanto contradictorio, debiendo desestimarse este primer vicio de nulidad.

## **B. De la primera causal subsidiaria**

**9°)** Que en forma subsidiaria, el Ministerio Público sostiene que la sentencia incurre en el motivo absoluto de nulidad del artículo 374 letra e) en relación a la letra c) del artículo 342 y 297 todos del Código Procesal Penal, por infracción al principio lógico de





razón suficiente, desde que la sentencia establece que las lesiones de la víctima obedecen a un hecho accidental, sin ponderar o valorar la prueba pericial producida respecto de la trayectoria balística desoyendo, los conocimientos científicamente afianzados, en que se fundan las afirmaciones del perito.

Además afirma que la sentencia vulnera las máximas de la experiencia.

Se señala por el recurrente que el fallo no hace referencia particular a la trayectoria balística de las postas que lesionan en concreto a la víctima, sino que establece que se cruzó en la línea de fuego y por ende, accidentalmente recibe los perdigones, pero no razona ni expresa por qué excluye del razonamiento la trayectoria balística determinada por el perito Rodrigo Bustamante Valdebenito y, en consecuencia, no valora toda la prueba rendida.

Explica que el médico Bustamante señala que de las lesiones que presenta la víctima y que constató directamente, de las imágenes que registran las fotografías del afectado incorporadas al juicio, del lugar donde estas lesiones se sitúan, y de su morfología, es posible colegir que la trayectoria del disparo fue “de frente, de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba” (página 13 del recurso de nulidad).

Enseguida se transcribe la pista de audio correspondiente a la declaración del perito y luego se reprocha que la sentencia al absolver establezca que el acusado habría disparado por la tronera del carro, hacia la derecha, en dirección a una plazoleta situada a 25 metros más adelante, desde donde provenían los disparos, y que la víctima se cruza, desde atrás del vehículo, por el costado del mismo, cayendo delante del J-030.

El recurso cuestiona que se establezca esta afirmación sin considerar la prueba rendida respecto de la trayectoria balística,



prueba pericial no descartada, que justifica en la ubicación de las lesiones, su morfología y su número, que la trayectoria es “de ADELANTE hacia ATRÁS y de ARRIBA hacia ABAJO” (página 14 del recurso) vulnerándose el principio de razón suficiente, desatendiendo las afirmaciones del perito, los conocimientos científicamente afianzados que este expresa, por lo que la decisión carece de sostén.

Afirma que la omisión de ponderación hace que lo que establece la sentencia en cuanto a que la víctima recibe un disparo en su cara, boca y cuello, el impacto de 11 de 12 perdigones o postas contenidos en el cartucho utilizado por la aludida escopeta antidisturbios, no cuente con correlación en la dinámica que afirma el acusado y, que por el contrario esa dinámica sea imposible dada la trayectoria científicamente probada. Añade el recurso que lo que se sostiene es más elocuente si se considera que la propia sentencia en su página 256 punto 9 dice que la pericia de Rodrigo Bustamante Valdebenito fue sumamente completa y detallada.

Enseguida el recurso hace un contraste en relación a cómo el voto disidente valoró esta pericia concluyendo de ella que las postas impactaron la cara de la víctima de adelante hacia atrás lo que corrobora la versión de la víctima y torna físicamente imposible la tesis de la defensa.

**10°)** Que el recurso señala también que se vulnera las máximas de la experiencia desde que da por probada la versión del acusado en cuanto a que la víctima se cruza en su huida, por la línea de fuego, desde atrás del vehículo, y por eso no lo ve, lo que significa que en vez de alejarse del peligro evidente, se acerca a éste.



11º) Que en cuanto al perjuicio, el recurrente vuelve a decir que se presume al tratarse de un motivo absoluto de nulidad y agrega que al soslayarse la prueba producida respecto de la trayectoria de las postas que impactaron a la víctima, sin justificar su omisión, implica una falta de fundamento plausible de sus conclusiones por lo que hace la misma petición que hizo respecto de la causal principal.

12º) Que a través de esta causal se trata de demostrar que la sentencia vulnera la sana crítica porque no da razón suficiente, en su fundamentación, en relación a la trayectoria balística, pues se dice, que no se ponderó los dichos de un perito que da cuenta de esta trayectoria y conforme a la cual el disparo habría sido de frente.

Sobre el particular, lo primero que puede observarse es una confusión en las conclusiones que, según el recurso se obtendrían de esta prueba omitida, ya que en la página 13 del recurso previo a la transcripción de la pista de audio se señala que el disparo habría sido de frente, de **atrás hacia adelante** y de abajo hacia arriba para luego en la página 14 en el penúltimo párrafo aseverar que el disparo sería de **adelante hacia atrás** y de arriba hacia abajo. Es decir, se dan dos conclusiones.

Enseguida, y entendiendo que lo que quiere concluirse es que conforme a la trayectoria balística que describiría este perito el disparo fue de frente y de adelante hacia atrás, es lo cierto que tal premisa es absolutamente incongruente con la acusación formulada por el Ministerio Público. Cabe además señalar, que cuando se invoca un vicio de nulidad, como el planteado, se asume que producto de éste se extrajo una conclusión errada y que la hipótesis que se quiere establecer como correcta debe ir en



armonía con la aseveración fáctica que se hace en la acusación, cuestión que aquí no acontece.

En efecto, en la parte pertinente de la acusación el Ministerio Público sostuvo: *“Por su parte la VÍCTIMA ETTIEN PAOLO GUTIÉRREZ ARIAS, estuvo el 30 de Marzo de 2018, entre las 01:00 a 02:30 horas de la madrugada, junto a otros terceros, tomando parte en manifestaciones en la comuna de HUECHURABA, específicamente en las CERCANÍAS del EDIFICIO que alberga a la MUNICIPALIDAD de esa COMUNA, y en particular en la intersección de las calles REPÚBLICA de PANAMÁ con REPÚBLICA de BRASIL. Al comenzar a retirarse del lugar, específicamente en calle REPÚBLICA de PANAMÁ con CAMINO EL BOSQUE, la víctima junto a un tercero, don NICOLÁS LÓPEZ HERNÁNDEZ, observa un VEHÍCULO tipo ZORRILLO de CARABINEROS cruzado en DIAGONAL en la calzada (el que resulta ser el VEHÍCULO J-031), por lo que decide pasar corriendo por el lado DERECHO del referido MOVIL, y al llegar a la altura del tercio delantero del mismo, escucha un disparo, y recibe en su CARA, BOCA y CUELLO, el IMPACTO de 11 de los 12 PERDIGONES o postas contenidos en el cartucho utilizado por una ESCOPETA ANTIDISTURBIOS.”* (énfasis agregado para mayor claridad).

Como se ve, la acusación plantea como hecho que la víctima pasó por el costado derecho del vehículo policial y que el disparo se habría recibido cuando iba alrededor del tercio delantero derecho. Entonces, no puede ahora plantearse, un hecho incompatible con éste en orden a que el disparo fue de frente y de adelante hacia atrás porque con ello se afecta la congruencia que el proceso está obligado a respetar.



Pero aún más, la sentencia advierte también este error, según se lee en la página 242 en cuanto plantea que la acusación afirma que la víctima pasó corriendo por el lado derecho del móvil y que al llegar al tercio delantero recibe el disparo en circunstancias que en el juicio se determinó que la versión de la víctima y de Nicolás López -testigo- no fue esa, sino que habrían tratado de esquivar al vehículo por entre medio del espacio que habría quedado entre los focos delanteros y la reja de una casa esquina y que Ettien no alcanza a pasar porque habría sido impactado en el rostro como al frente del foco derecho delantero del J *“lo cual difiere a lo indicado en la acusación”* señala el fallo.

La sentencia indica también que el Ministerio Público fue vago en establecer la forma en que Claudio Crespo le habría disparado a Ettien Gutiérrez y agrega *“siendo ello algo esencial”* pues en la acusación solo dice *“de acuerdo al ángulo de disparo establecido”* sin especificar, advierte el fallo, si el acusado abrió o no la puerta del copiloto, si se bajó o no del J, para luego concluir *“La misma acusación da plausibilidad a los argumentos del acusado Claudio Crespo, porque éste señaló expresamente que Ettien Gutiérrez habría pasado corriendo por el lado derecho del referido móvil –sin percatarse de su presencia- y que al llegar a la altura del tercio delantero del mismo recibió el disparo, que es lo que afirma Claudio Crespo y no lo que se nos intentó mostrar en las diversas fijaciones de versiones y explicaciones, en cuanto a que Ettien Gutiérrez pasó por la parte delantera del vehículo”*.

Todo lo anterior demuestra que la omisión de la prueba referida en cuanto por ella se habría demostrado una determinada trayectoria balística carece absolutamente de relevancia por cuanto aún de ser así, el hecho que de tal prueba pretende



extraerse es incompatible con la acusación formulada por el Ministerio Público y ello hace decaer el presunto vicio de nulidad.

**13°)** Con todo, desechar este vicio de nulidad, no significa que la sentencia haya omitido referirse a la dinámica del disparo, pues aun cuando no utilice la palabra “trayectoria balística”, es lo cierto que se dedica en extenso a analizar cómo pudo desarrollarse el disparo precisamente con la prueba aportada por la perito balístico de la Policía de Investigaciones doña Ximena González, según se lee de la página 260 en adelante quien analizó varias posibles dinámicas de ocurrencia, por lo tanto la sentencia sí tiene sustento en sus conclusiones dando razón suficiente de ellas.

**14°)** Que en cuanto a una transgresión a las máximas de la experiencia, que es el otro vicio en que se hace consistir la causal en estudio, recordemos que el Ministerio Público dice que la sentencia al afirmar que la víctima se cruza en su huida, por la línea de fuego, desde atrás del vehículo, y por eso (el acusado) no lo ve, significaría que en vez de alejarse del peligro evidente, se acerca a éste, cuestión que iría contra las mencionadas máximas de experiencia, pues bien, basta para rechazar tal reproche que ha sido el propio Ministerio Público el que planteó esto en su acusación cuando dijo que la víctima “*decide pasar corriendo por el lado DERECHO del referido MOVIL*”. Entonces si en la acusación se señala que fue la víctima quien decide pasar por el lado del vehículo policial esa noche, no puede sostenerse ahora, sin caer en contradicción, que al aseverarlo así el fallo constituye un hecho que atenta contra las máximas de la experiencia, pues tal planteamiento es insostenible.

Por todo lo anterior, esta causal de nulidad debe ser también desechada.

### **C. De la segunda causal subsidiaria**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XUXEXQVMSSX

**15°)** Que en subsidio, el Ministerio Público plantea que la sentencia incurre en el motivo absoluto de nulidad del artículo 374 letra e) en relación a la letra c) del artículo 342 y 297 del Código Procesal Penal, al vulnerar el principio lógico de razón suficiente, desde que la absolución se funda, entre otros aspectos, para descartar que el disparo se produjo en pasaje Panamá con Camino Al Bosque de Santiago, en la declaración de la perito Ximena González Gálvez, quien habría descartado que, desde la tronera, con la puerta cerrada, el tiro en la posición en que la víctima se ubica a sí misma y ubica al J-030, sería balísticamente inaceptable.

Refiere que la sentencia alude a la declaración de la perito en la página 198 en la que expresa que resultó fundamental sus tres conclusiones como posibles dinámicas de disparo. Se añade que esas tres conclusiones son desarrolladas en las páginas 262 y 263, pero se omite que la perito incorporó una cuarta variable, acompañando como prueba ante esta Corte una versión escrita de esta declaración en la que se consulta a la perito sobre dos elementos que ella denominó inamovibles, a saber la posición del vehículo y la posición de la víctima respecto de lo que recordaba ésta, preguntándosele por la fiscal si estos elementos inamovibles descartaban totalmente que el disparo pudo producirse en el pasaje Panamá, desde la tronera y con la puerta cerrada, respondiendo que no, que no lo descartaba porque “basta con girar el vehículo policial, no cambiarlo de lugar, de la intersección, sino que como hacer un giro del vehículo policial, de tal forma que al simular un disparo a través de la tronera pueda este incidir sobre el rostro, y entonces sería esta versión balísticamente aceptable”. Señala además que la distancia en la que posiciona el vehículo policial Ettien de su posición donde recuerda haber



recibido el disparo, está dentro de lo que se obtiene del estudio de las lesiones, 3,66 metros, entonces la distancia en su declaración es aceptable.

Se añade que esta cuarta variable sí fue recogida en el voto de minoría página 345 cuando dice “Sin embargo, la perito también sostuvo que: 1. Basta con girar levemente la posición del vehículo “j” para que un disparo desde dentro del vehículo táctico sea posible, cumpliéndose con la distancia dada por la dispersión; 2. Si la puerta del copiloto es abierta y éste dispara desde la tronera, habiéndose bajado del vehículo táctico, es posible que con este ángulo el disparo alcance el rostro de la víctima Ettien Gutiérrez Arias”.

Agrega el Ministerio Público que nuevamente la información referida por la perito, en aquella parte que pone en tensión o controvierte las conclusiones a las que llega la sentencia, fueron preteridas por lo que las decisiones aparecen carentes de fundamentos, violando la obligación de ponderar toda la prueba rendida y de otorgar a las decisiones razón suficiente. Se indica además que este actuar da cuenta de un sesgo confirmatorio que está a la base de esta conducta, al tiempo que se refiere en el fallo que la declaración de la perito es sumamente completa y detallada, que dejó la mejor impresión, solo advirtiendo un dejo de parcialidad al no haber llevado al imputado al sitio del suceso y en su empeño de tratar de delimitar lo más posible, por iniciativa propia, la distancia del disparo, pero sin que ello disminuya su contribución.

Se concluye que la sentencia incurre así en el vicio denunciado por una justificación sin lógica interna pues no se resuelve, al omitirse una información probatoria proporcionada por la perito,





omitiendo su declaración íntegra pasando a ser una conclusión infundada.

Añade que la causal se configura al dar por sentado que la versión de la víctima fue descrita como balísticamente inaceptable por la perito, sin que se explicita que la misma perito señaló bajo qué específicas circunstancia llega a esa conclusión, y a su vez, bajo qué condiciones concretas, se puede llegar a una conclusión contraria.

**16°)** Que al explicar el perjuicio que ocasiona el vicio reitera lo mismo que en las causales previas, al igual que su petición.

**17°)** Que en relación a esta causal sucede algo similar a lo que ocurre con la anterior, esto es, la incongruencia de la hipótesis que se intenta demostrar como posible con aquella planteada en la acusación.

En efecto, el Ministerio Público cuestiona que el fallo no haya reparado, como sí lo hizo el juez disidente, en la posibilidad planteada por la perito de “girar el vehículo policial”, “como hacer un giro del vehículo policial”, sin cambiarlo de lugar ni de intersección, pero eso pasa por aceptar que el disparo se produce cuando la víctima pasa por delante del vehículo policial o capó y no como el propio ministerio público aseveró “por el lado derecho del referido móvil”.

Este inconveniente hace decaer absolutamente la causal de nulidad invocada, es más, la sentencia en la página 266 repara en este obstáculo cuando en su último párrafo dice “*A mayor abundamiento, en la propia acusación se consignó que Ettien Gutiérrez pasó corriendo por el lado derecho del referido móvil y no por el capó o parte delantera de éste, como se trató de hacer ver al Tribunal durante el juicio. Del mismo modo y este punto es sumamente relevante, ni siquiera en la acusación se especificó si*



*la puerta del copiloto del vehículo J031 se encontraba abierta o cerrada o en qué posición estaba Claudio Crespo cuando efectuó el disparo con la escopeta antidisturbios, esto es, si estaba sentado en el asiento del copiloto al interior del J como refirió la víctima-por cuanto Ettien Gutiérrez le señaló a la perito Ximena González que presumía que la persona que le disparó estaba al interior del J- o se bajó completamente del vehículo, surgiendo también la duda razonable respecto de la razón por la cual ello no se especificó en la acusación. Ya se señaló que la perito Ximena González concluyó que de haberse efectuado el disparo por la tronera del J, con la puerta del copiloto cerrada –primera posibilidad planteada- era imposible que Ettien Gutiérrez hubiese recibido el impacto debido al ángulo de disparo, por ende, en razón de lo anterior, forzosamente trataron de hacer calzar su versión con dos dinámicas restantes no señaladas en la acusación, esto es, bajándose Claudio Crespo del vehículo J031, abriendo completamente la puerta y disparando por la tronera al rostro de Ettien Gutiérrez –usando la puerta así como una especie de escudo- o derechamente bajándose y disparándole de manera directa, sin uso de tronera ni nada que impidiera su visual” (página 266 y 267).*

**18°)** Que además, tampoco se trata que la prueba haya sido omitida, pues lo que hace la sentencia es analizar precisamente las tres conclusiones a las que arribó la perito y si bien frente a una interrogación de la fiscal aparece lo que el Ministerio Público denomina una cuarta variable ello implica introducir un elemento fáctico que solo la perito incorpora mas no precisa cuando habla de “girar el vehículo policial” pero ¿cómo? y ¿cómo conciliar dicho giro –no precisado- con el hecho por el que se acusó de que la víctima pasó por el lado derecho del móvil y no por delante?.



Es más, incluso al leer el voto de minoría tampoco es posible relevar esta supuesta omisión de la declaración de la perito al nivel anulatorio que persigue el Ministerio Público, pues el disidente en la página 345 da tres posibles hipótesis en que pudo ocurrir el disparo acudiendo incluso a un manual de operaciones de carro táctico del año 1989 sobre formas de disparo y se pregunta si varía en algo la imputación si el acusado disparó desde dentro o desde fuera del vehículo policial o con la puerta abierta o con la puerta cerrada concluyendo que no porque igual las lesiones se produjeron y porque el tirador experto reconocía la entidad del riesgo consistente en disparar a la víctima con la escopeta antidisturbios, pero tales planteamientos soslayan absolutamente que en el juicio oral hay una acusación y que el artículo 259 del Código Procesal Penal exige en ella “La relación circunstanciada de el o los hechos atribuidos y de su calificación jurídica” y ello ¿por qué? porque serán esos hechos los que el acusador tiene la obligación de demostrar para obtener una condena puesto que el artículo 341 exige que la sentencia condenatoria no exceda el contenido de la acusación y expresamente establece que no se puede condenar por hechos o circunstancias no contenidos en ella, entonces, ¿es posible levantar una hipótesis de cómo se hizo el disparo que no estén contenidas en la acusación o que no sean compatibles con los hechos afirmados en ella?, claramente no, porque eso significa sorprender a la defensa y vulnerar las normas antes citadas.

En consecuencia, no cabe sino desechar esta causal de nulidad.

#### **D. De la tercera causal subsidiaria**

**19°)** Que el Ministerio Público finalmente sostiene que la sentencia incurre en el motivo absoluto de nulidad del artículo 374



letra e) en relación al artículo 342 letra c) y 297 del Código Procesal Penal por infracción al principio de razón suficiente.

Explica que ello acontece cuando la sentencia da por acreditado que Claudio Crespo Guzmán ejecutó el disparo que lesionó a Ettien Gutiérrez Arias en las afueras del edificio consistorial de Huechuraba (a esa fecha en construcción) y que tras el disparo lo traslada a un “lugar seguro” que es la intersección de calle Camino El Bosque de Santiago con República de Panamá, precisamente donde la víctima sitúa la ocurrencia de los hechos, infringiendo las máximas de la experiencia.

En su explicación, el Ministerio Público reproduce la parte respectiva de la sentencia y sostiene que hay falta de coherencia interna respecto del motivo de traslado descrito respecto de la víctima, e indica que el fallo afirma que “lógicamente” el propósito del traslado a la zona segura con luz es verificar “bien” las heridas de Ettien Gutiérrez, aunque apenas un párrafo más arriba el mismo tribunal constató la declaración del testigo Claudio Padilla, que la tripulación del J-030 se baja del vehículo blindado y comprueban que hay una persona lesionada, lo que es corroborado por el propio acusado y los restantes funcionarios que lo acompañaban, quienes incluso describen las lesiones, e indican haberle prestado los primeros auxilios, cuestión que, afirma el Ministerio Público, el tribunal no da por probado, dada las declaraciones de los incumbentes. Entonces se pregunta la parte recurrente de nulidad ¿cómo es que para las sentenciadoras resulta lógico el porqué del traslado?, simplemente -se señala en el recurso- eso no se sabe por un déficit de valoración o motivación.



Se añade que no basta con la mención de qué también cuestionaron por qué no lo trasladaron en el J directamente al centro asistencial o a la comisaría, sino que, en un ejercicio completo y debido, debe abordarse razonadamente dicho elemento.

Agrega el recurso que esto es importante porque el fallo descartó la versión de la víctima y del testigo Nicolás López en el sentido que el disparo se produjo en pasaje Panamá con Camino El Bosque de Santiago por no ser creíble.

Se indica también que la conclusión de la sentencia tampoco se conforma con las máximas de la experiencia en cuanto al alcance de las expresiones utilizadas en el fallo, a saber: “lugar seguro”, “se entendió” y que “lógicamente” el traslado a ese lugar seguro, fue para contar con luz que permita ver “bien” las lesiones.

Se argumenta que al razonar de ese modo se omite considerar que según los funcionarios Padilla, Machuca, Sandoval y el acusado, dicho lugar les era desconocido porque no operaban en ese sector; que según el funcionario Medina, los manifestantes violentos y entre ellos los sujetos que les habían disparado, arrancaron hacia el oriente, es decir, hacia la intersección de avenida Camino del Bosque de Santiago con calle República de Panamá y que para llegar al lugar supuestamente seguro, la policía tenía que pasar por sobre una barricada ubicada en la intersección de avenida El Bosque de Santiago con República de Estados Unidos.

Se añade que la sentencia no se detiene en responder la interrogante que fluye de las máximas de la experiencia y de la regulación de los artículos 129, 130 y 131 del Código Procesal Penal de por qué si la lesión y detención se produce en el edificio



Consistorial, es decir, en calle Camino El Bosque de Santiago entre Premio Nobel y Estados Unidos, a dos cuadras al oriente de la 54° Comisaría de Huechuraba donde había luz, no fue ese el destino inmediato.

Se estima por el recurrente que atenta contra las máximas de la experiencia internarse a un lugar desconocido, donde posiblemente hay personas armadas, en vez de hacer un recorrido equivalente, en sentido contrario hacia un recinto institucional conocido, donde podían ponerse a resguardo y donde, en todo caso, deben trasladarse los detenidos una vez aprehendidos. El recurso califica el comportamiento carente de lógica tanto por las circunstancias de la cercanía con la unidad policial y el centro de salud, como por las características del vehículo, no apto para el traslado del detenido. Se añade que nada explica ni justifica el presunto traslado pues no se trata del lugar de destino normativo ni natural de un detenido y no se trata de un lugar seguro y ello es más evidente –dice la parte recurrente- atendida la experticia que expone el acusado en su declaración ante el tribunal en que reconoce que impartía clases sobre “detención” lo que implica un manejo superior sobre la normativa legal y reglamentaria al respecto.

Se hace referencia nuevamente al voto de minoría que en la página 352 dice que la versión del acusado no se aviene con las máximas de la experiencia porque no es lugar seguro, aquel en el que carabineros nunca ha operado y que queda al interior de una población que no conocen y que en ese momento es hostil a la policía y que si la preocupación era trasladar a la víctima hasta un lugar seguro, lo razonable era llevarlo hacia la 54° comisaría de Huechuraba que queda aproximadamente a dos cuadras en línea recta del edificio consistorial o directamente al SAR de la



Pincoya considerando que éste quedaba a una cuadra de la unidad policial.

**20°)** Que en relación al perjuicio y a la petición que se formula a esta Corte, ambos aspectos son similares a los planteados en las causales anteriores.

**21°)** Que como se sabe, el principio de razón suficiente supone que ninguna enunciación puede ser verdadera sin que haya un motivo, causa o explicación suficiente para que sea así. De esta forma ante dos posibles premisas se infringe el principio de razón suficiente si se opta por una que es falsa en atención a que no habría motivo suficiente para justificarla.

Desde esta óptica el que la sentencia asiente como “lugar seguro” un lugar con luminosidad, como se razona en la página 308 no vulnera la razón suficiente y ello por cuanto en esa parte del fallo se dice que “... todos (los funcionarios) así refirieron de modo conteste que lo subieron en la parte posterior del J y lo trasladaron a una zona segura señalada por el acusado, lo cual era camino El Bosque de Santiago con República de Panamá. Al respecto, el tribunal entendió a qué se referían con zona segura – por qué también cuestionaron por qué no lo trasladaron en el J directamente al centro asistencial o a la Comisaría-. En efecto, los funcionarios fueron claros en referir que zona segura era un lugar con luminosidad, no que las condiciones fuesen más seguras, también coincidiendo todos en referir que posterior al disparo con la escopeta antidisturbios la situación se calmó –o sea, los sujetos se dispersaron, siendo ésta la finalidad de la escopeta antidisturbios- y subieron a la víctima a la parte posterior del PTR y lo trasladaron a un lugar que Claudio Crespo consideró como seguro debido a la luminaria existente, el cual era la intersección de camino El Bosque de Santiago con República de Panamá –



*como a 2 cuadras hacia el oriente de donde Ettien Gutiérrez había recibido el disparo según versión del imputado-“.*

Como se ve, la sentencia sí entrega una razón suficiente para el traslado que se hace de la víctima y esa razón fue llevarlo a un lugar con luminosidad. De esta forma, la premisa acerca del traslado es motivada en la sentencia y esa motivación se obtiene de la declaración de los funcionarios policiales –tal como dice el tribunal en la parte reproducida- por lo que no se trata de una inferencia que hayan hecho los jueces pues, por más que se diga en una línea del fallo que “el tribunal entendió” inmediatamente después se dice que los funcionarios fueron claros en señalar que la zona segura era una con luminosidad. Es más, también explican el alcance de la “zona segura” en cuanto a que solo era por la luminosidad y no que las condiciones fuesen más seguras.

Pero la explicación no sólo se queda ahí, sino que también el fallo se hace cargo de por qué no llevaron a la víctima a la comisaría o a un SAR y el tribunal dice que ello es porque primero debían verificar sus heridas y si estaba oscuro en el lugar donde ocurrió la lesión mal podrían haberlo verificado bien y agrega que según el funcionario Diego Sandoval hubo necesidad de pedir cooperación sobre la víctima a otro J y al Sprinter para que lo trasladaran a un centro médico, porque no lo podían trasladar ellos en el J por el espacio reducido y que eso justifica haberlo trasladado desde donde fue herido a la zona segura porque fue un trayecto corto y trayecto corto para él es un par de minutos, concluyendo la sentencia que esa es una explicación razonable.

Entonces, aun cuando la explicación que da la sentencia en orden a que el traslado fue para verificar bien las heridas de la víctima y que tal razón no aparece en esa parte del fallo justificada en alguna prueba es lo cierto que acto seguido adiciona





un segundo motivo que fue la colaboración que se requirió para hacer el traslado hacia un centro asistencial por la imposibilidad de continuar haciéndolo en el vehículo J y de allí entonces llevarlo hacia un lugar seguro y esta motivación sí aparece obtenida de la declaración del testigo Diego Sandoval.

**22°)** Que tampoco se aprecia una vulneración a alguna máxima de la experiencia que necesariamente obste a la hipótesis escogida en el fallo, pues la decisión de trasladar a la víctima hacia una zona con luz y pedir colaboración para el traslado al centro asistencial tiene asidero no solo en la prueba sino también aparece plausible, demostrándose que la circunstancia que el Ministerio Público considera más razonable, esto es, haberlo llevado a la comisaría o al centro asistencial si bien pudieron también ser factibles, lo cierto es que una no excluye a la otra y ello solo permite concluir que al final se trata simplemente de un desacuerdo de parte del recurrente en cuanto al mérito de la prueba pero no una infracción al principio de razón suficiente o a alguna máxima de la experiencia y eso descarta esta última causal de nulidad.

**23°)** Que por todo lo anterior el recurso de nulidad del Ministerio Público debe ser desestimado, sin que las pruebas acompañadas para probar las respectivas causales tengan la fuerza de modificar la decisión, pues se trata de un material probatorio que consta en el juicio y al que se ha hecho referencia en la sentencia.

## **II. En cuanto al recurso de nulidad presentado por el Consejo de Defensa del Estado**

**24°)** Que el abogado procurador fiscal de Santiago, don Marcelo Chandía Peña dedujo recurso de nulidad en contra de la



sentencia absolutoria fundado en las causales que indica de manera conjunta y subsidiaria, según se pasa a explicitar.

**A. De las causales de nulidad deducidas en forma conjunta:**

***i. La primera causal***

**25°)** Como primera causal de nulidad se invoca la del artículo 374 letra e) en relación al artículo 342 letra c) y 297 del Código Procesal Penal. Se señala que la sentencia no contiene una exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados.

En primer término se refiere a la desestimación del lugar en que se produjeron los hechos, conforme lo indica la acusación y situarlo en las afueras de un edificio que estaba siendo saqueado, indicándose que no se valora prueba debidamente incorporada por los acusadores, desestimándola sin hacerse cargo en su fundamentación ni indicándose las razones para hacerlo.

Reproduce parte de la sentencia en que se refiere al lugar exacto de este edificio que habría sido ubicado en camino El Bosque de Santiago N° 492 de la comuna de Huechuraba según el llamado telefónico y en las distintas actas, dirección que según el fallo el Ministerio Público contravirtió pues al colocar dicha dirección en *google maps*, tal numeración no existe en esa avenida. Agrega que la sentencia incurre en un error al señalar que –según el Ministerio Público- esa dirección no existe puesto que en realidad y si el tribunal no hubiese desestimado la prueba debidamente rendida debió estimar como un “error” la fijación del sitio del suceso de acuerdo a la versión del imputado ya que no sólo no se encontraba la construcción del Edificio Consistorial de la Municipalidad de Huechuraba, sino que en esa dirección no se



encuentra ninguna dependencia de dicho municipio, sino una casa.

Agrega que existe coincidencia entre el inmueble antes señalado y la fotografía N° 33 del medio de prueba “Evidencias Materiales y Otros Medios de Prueba” N° 10 ofrecido como set de 52 fotografías custodiadas bajo el NUE:6105722, correspondiente al informe pericial fotográfico N° 1759/2020 de 8 de octubre de 2020 y que daban cuenta de las diligencias de versiones realizadas respecto de la víctima Ettien Gutiérrez Arias y Nicolás López Hernández, insertándose en el recurso la referida fotografía.

Añade que dentro del nutrido material probatorio hubo prueba testimonial y pericial de que el sitio del suceso era efectivamente el señalado en las acusaciones presentadas por su parte y los demás persecutores, es decir, la intersección de Camino Al Bosque de Santiago con República de Panamá. Enseguida cita las declaraciones de la víctima, del testigo Nicolás López Hernández, de Jaime Cancino Jara, del funcionario de carabineros José Ignacio Candia Torres, de Gonzalo Arévalo Soto y de Cristian Lizama Loyola todos los cuales harían referencia a que los hechos habrían acaecido en Camino Al Bosque de Santiago con República de Panamá.

Agrega que no obstante estos elementos de cargo, la sentencia, por mayoría, desestimó que el sitio del suceso fuese el señalado en las acusaciones valorando de manera equivocada la prueba, al estimar que existirían inconsistencias entre los relatos de la víctima Ettien Gutiérrez y el testigo Nicolás López acusando un propósito ganancial en lo referido a la ubicación del sitio del suceso; que en el caso del funcionario Jaime Cancino la sentencia señaló que habría denuncia de presiones en la



declaración por parte de funcionarios de Investigaciones; que en relación al funcionario José Ignacio Candia el fallo estimó que era más factible que lo que haya visto dicho funcionario fue lo sucedido en Camino El Bosque de Santiago con República de Estados Unidos que con República de Panamá; que respecto de los investigadores Gonzalo Arévalo y Cristian Lizama se habló de un posible sesgo en la investigación hacia el acusado Claudio Crespo y que en la diligencia investigativa en la localidad de Los Álamos, la sentencia señaló que sólo se contó con la versión del acusado de registros escritos de éste de junio de 2018 tomada por una asistente de fiscal ignorando absolutamente que tal plazoleta no quedaba hacia adelante en línea recta.

Acusa el recurrente que estas afirmaciones constituyen claras contradicciones lógicas y empíricas entre lo considerado y finalmente razonado.

Enseguida hace referencia a lo que, en su concepto, son vicios del fallo.

Comienza analizando el supuesto fin ganancial que tendría la víctima y el testigo López en la fijación del sitio del suceso e indica que no se da una razón suficiente para esa afirmación, desestimando que fuera una intención de querer condenar al acusado Crespo Guzmán; en relación a lo que el fallo asevera del funcionario Cancino Jara, dice que se hace una suposición, sin razón suficiente de que probablemente vio los hechos ocurridos en República de Panamá con Camino Al Bosque de Santiago, en circunstancias que su declaración es clara en cuanto a la secuencia de los hechos, tampoco se indica por qué debería descartarse lo afirmado por Cancino en cuanto a que vio una persecución de personas por el J de Crespo hacia los pasajes y que vio a dos detenidos dispuestos justo conforme a la dinámica



descrita en la acusación y que de ser así bajo ningún supuesto habría visto detenido por un funcionario del J-031 a otra persona que no fuera Ettien pues el fallo estimó que Nicolás López no fue detenido allí; respecto a las supuestas presiones que se habrían ejercido contra los funcionarios policiales por parte de la Policía de Investigaciones, todos los funcionarios de Carabineros dijeron que no reportaron aquello a alguien de la PDI o a algún superior de Carabineros; respecto de lo afirmado sobre José Candia dice que es inexplicable lo concluido por el fallo porque Candia dio cuenta detallada de haber visto el vehículo tripulado por Crespo en persecución de manifestantes justo en una esquina de un pasaje, cuando escucha el estruendo y si fuera como dice el tribunal, esto es, que los hechos fueron en República Estados Unidos con Camino Al Bosque de Santiago se habría percatado primero del disparo y, con posterioridad de la dispersión de manifestantes y habría visto al vehículo policial en una dirección vertical y no cruzado como señaló ante la policía y ante el tribunal; en cuanto a la existencia de sesgo por la policía de la que advierte el tribunal, considera que hay un razonamiento contradictorio ya que el tribunal refiere el sesgo al haberse considerado por el personal policial lo afirmado por Candia para ubicar el sitio del suceso en República de Panamá con Camino Al Bosque en circunstancias que para el tribunal lo que Candia vio fue en la esquina de República de Estados Unidos con Camino Al Bosque de Santiago, pero es imposible que su relato pudiera situarse en esa intersección dada el contenido del relato pues de haberse colegido por los detectives lo que reclama el tribunal existiría una tergiversación que sí constituiría un sesgo de su parte; en la misma línea del sesgo, reprocha que el tribunal haya reclamado que no se corrigió a los testigos en sus declaraciones ante la



policía cuando incurrían en algún error, en circunstancias que la declaración debe reflejar el contenido tal cual fue expresado por el deponente; por otra parte dice que siguiendo con lo relativo al sesgo también el tribunal lo refirió respecto de la declaración de Cristian Lizama.

Por todo ello estima el recurrente que la prueba no se valoró adecuadamente, sin una debida fundamentación.

**26°)** Que dentro de esta misma causal se refiere a la desestimación de una encerrona a la víctima Ettien Gutiérrez Arias y al testigo civil Nicolás López Hernández. Refiere que hubo debate en el juicio si se produjo o no la referida encerrona, sin que el tribunal se hiciera cargo de ello, cuestión que necesariamente debió ser un antecedente acreditado, al existir prueba testimonial, pericial y visual que da fe de la existencia de este hecho.

Para ello reproduce las declaraciones de la víctima y del testigo aludido que se refieren a esta encerrona, lo que fue retratado en la diligencia sobre “fijación de versiones” insertándose en el recurso las diversas fotografías de esta fijación. Dice que esto fue ratificado por el perito fotógrafo Ariel Silva Narváez quien además reconoció estas fotos como de su autoría citándose las pistas de audio en que ello ocurre.

**27°)** Que también se cuestiona la desestimación de la inexistencia de riesgo para funcionarios de Carabineros en el momento en que se produce el disparo a la víctima. Se hace referencia a lo que el tribunal sostuvo en cuanto a que el disparo se habría efectuado no en el lugar en que indica la víctima y el testigo López sino en las cercanías del forado del edificio Consistorial indicándose por el recurrente que esa conclusión es errada, ello por lo que se señala previamente en el escrito de nulidad a propósito del sitio del suceso y porque ningún miembro



de Carabineros fue atacado en dicho lugar, sea que se haya encontrado a bordo de un vehículo policial o haya estado de infantería.

Para ello reproduce las declaraciones de la víctima, la declaración de Claudio Padilla –que se refiere al sitio seguro porque tiene luz eléctrica y porque ya no había desmanes en el lugar-; a los dichos de Cristian Machuca tripulante del dispositivo que dice que cuando llegaron al lugar seguro no escuchó disparos en ese instante; a la posición de la sección 19° de Fuerzas Especiales referida por los tripulantes del vehículo J-0301; a los dichos de Luis Rojas Lobos miembro de la sección N° 19 y a los dichos del sargento Iván Vásquez.

**28°)** Que otro aspecto abordado en la causal de nulidad es la desestimación de la existencia de versiones acomodaticias y contradictorias del acusado. Refiere para ello que el acusado Crespo entregó en al menos seis oportunidades sus versiones acerca de lo ocurrido el día de los hechos especificando cada una de ellas en el libelo de nulidad y que de haberlas considerado habría permitido concluir que eran acomodaticias y contradictorias. Así en la declaración como funcionario aprehensor no refirió fogonazos, ni la plazoleta de la cual venían los disparos y hacia la cual él dirigió el suyo, ni haber trasladado a la víctima a un lugar seguro después de haberlo lesionado; declaración similar presta ante Carabineros como imputado; en el relato ante el fiscal de turno es similar; en la declaración ante el fiscal administrativo no describe la conducta de la víctima, ni donde realizó el disparo, ni los fogonazos pero incorpora la existencia de la plazoleta desde la cual venían los supuestos disparos y hacia la cual él disparó; afirma que trasladó a la víctima a un lugar seguro luego de haberlo lesionado, que entregó a la



víctima a la sección 19 para su traslado a un centro asistencial; en la declaración ante el Ministerio Público no describe la conducta de la víctima ni el haber visto fogonazos, es la primera declaración en la que caracteriza la plazoleta como una en la que habían árboles, es la primera en que indica que el lugar seguro tenía luz eléctrica y es la primera en la que grafica con figuras geométricas el lugar donde estaba el supuesto forado y la plazoleta desde la que provenían los disparos, quedando dispuestas en línea recta, de poniente a oriente; en el juicio reconoció que indicó aproximadamente el lugar del forado con un triángulo y el de la plazoleta con un círculo y; el relato ante el tribunal se caracterizó por ser el más completo pues se refirió a los puntos anteriores y agregó y modificó algunos otros, así caracterizó la plazoleta con palmeras y la ubicó en forma diagonal desde la perspectiva del vehículo que tripulaba –a diferencia del caso anterior en que dicha plazoleta estaba en línea recta de frente al dispositivo policial-; es primera vez que indicó haber reconocido a Ettien Gutiérrez por su bandana entre todos los manifestantes y es la primera vez que dice que vio fogonazos.

De ello concluye el recurrente que con el paso del tiempo el acusado fue acomodando su relato, tratando de dar una justificación a su conducta y sin embargo dicho análisis de declaraciones no fue valorado ni realizado por el tribunal.

Enseguida el recurrente alude a los protocolos para el mantenimiento del orden público entregados por el acusado uno con cuatro aspectos generales, y sin embargo dos meses después en el sumario administrativo se acompaña un protocolo con cinco aspectos generales, se agrega que esto fue tímidamente observado en el fallo aludiendo a un eventual desconocimiento y a la burocracia, estima el impugnante que no





está respaldada con ningún antecedente probatorio y se atenta contra la lógica y las máximas de la experiencia reconocer que el acusado afirmó ante dos fiscales que los documentos eran fieles con sus originales existiendo una clara diferencia en su favor en lo referido a la investigación penal; que el acusado hizo una revisión descuidada de la documentación que remitió; que desconocía cuántos eran los Aspectos Generales que contemplaba el protocolo en circunstancias que contaba con más de 10 años de experiencia y que debía rendir examen anual.

Se alude también para la aseveración que el acusado Crespo dio versiones acomodaticias a la inexplicable entrega al Ministerio Público de una relación de servicios parcializada omitiéndose incluir a 10 funcionarios de Carabineros refiriéndose así a la prueba documental N° 2 en circunstancias que la Prueba documental N° 9 corresponde a la que se remitió desde la Prefectura de Fuerzas Especiales con una relación del personal de la 40° Comisaría para el servicio del 29 y 30 de marzo de 2018 que incluye un total de 23 funcionarios incluyéndose en esta nómina a los funcionarios Cancino y Candia. Al respecto, dice que el tribunal lo calificó como error, descartando mala fe, más el recurrente no comparte ese razonamiento porque dice que se omitió al personal de la sección N° 19 y se incluyó solo a aquellos que, en el juicio, abonaron su tesis exculpatoria.

Se agrega, en sintonía de la afirmación de versiones acomodaticias por parte del acusado, el croquis que realizó en la investigación administrativa en la que se posiciona a los manifestantes que habrían disparado a Carabineros y hacia los que el acusado disparó en un lugar posterior a su dispositivo, en vez de más adelante, como afirmó al tribunal y fija la detención de la víctima en la intersección de Camino Al Bosque con República



de Estados Unidos en lugar de las inmediaciones del edificio Consistorial, frente al J 031. Se introduce una imagen de la prueba documental N° 8.

**29°)** Que en otro aspecto, el recurso se refiere a la desestimación de la distancia y trayectoria del disparo que produjo la lesión a la víctima señalada en la acusación. Sobre ello dice que se rindió abundante prueba que daba cuenta, según dice, que el disparo, se produjo en la forma descrita en el libelo acusatorio. Reproduce lo que la sentencia tuvo por establecido en orden a que el disparo se hace hacia donde venían los disparos, siendo impactada la víctima, quien justo en ese momento pasa por el costado derecho del móvil recibiendo el impacto en su cara, boca y cuello. Sin embargo, el recurrente dice que tal razonamiento infringe la letra c) del artículo 342 y alude para ello a la declaración del médico del LACRIM Rodrigo Bustamante que son contrarias a las que llega el tribunal y a quien se le exhibe la fotografía N° 22 A, describiendo la trayectoria desde delante atrás, explicando luego el perito en observación a la fotografía N° 1 del medio de prueba “Evidencia Materiales y Otros Medios de Prueba N° 8”, dando razones de que el disparo fue de adelante hacia atrás.

Añade que la sentencia no hace razonamiento alguno sobre esa trayectoria, ya sea para darlo por acreditado o para desestimarlo con algún medio probatorio, en circunstancias que si el disparo se hizo como señala el acusado y dado por acreditado en la sentencia ello es lógica y científicamente incompatible con la declaración del perito Bustamante. Añade que la declaración del perito es compatible con las fotografías que singulariza. Complementa lo señalado con la intervención de la perito Ximena González en cuanto sostuvo que el disparo pudo producirse en



pasaje Panamá, desde la tronera y con la puerta cerrada y para ello bastaba girar el vehículo policial, considerando además que la distancia del disparo que determinó la perito fue dada por acreditada por el tribunal.

Sin embargo, dice que la dinámica que el tribunal dio por acreditada, es contraria a lo que se acreditó en el juicio –un disparo de adelante hacia atrás- y ello dice que es compatible con la dinámica del disparo que describe la víctima y la descrita en el libelo acusatorio.

**30°)** Que luego explica el recurrente la trascendencia de la causal y dice que se ha privado a su parte conocer el fundamento de la sentencia en orden a absolver al acusado y con ello acreditar los delitos por los cuales se acusó, explicando, a propósito de cada motivo de vicio el perjuicio que le ocasiona a su parte, desechando el sitio del suceso planteado por los acusadores y aceptando la alternativa de la defensa. Por todo ello solicita se anule la sentencia y se disponga la realización de un nuevo juicio ante tribunal no inhabilitado.

#### ***ii. La segunda causal***

**31°)** Que en forma conjunta con la primera causal, el Consejo de Defensa del Estado invoca la del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación con los artículos 342 letra c) y 297 del mismo cuerpo legal.

Explica que la sentencia vulnera los preceptos indicados al hacer sus conclusiones en relación a los siguientes tópicos:

En cuanto al sitio del suceso, para lo cual reproduce lo que dice la sentencia, expresa los cuestionamiento del parte policial mendaz en lo referido a la indicación de Camino Al Bosque de Santiago N° 492, a la comunicación que hizo el acusado en la llamada al fiscal de turno, y vuelve a reproducir la sentencia en



cuanto dio plausibilidad a la cita errónea del número porque sólo había un muro perimetral con planchas OSB, por lo que era evidente que no iba a existir numeración, diciendo que era plausible que los funcionarios apreciaran algún letrero de referencia para poder situar el sector y que el edificio consistorial sí tenía una entrada que daba más bien hacia calle Camino El Bosque de Santiago la cual no presentaba numeración, siendo éste el lugar donde estaba el forado, pero -dice el recurrente- omite hacerse cargo del hecho que la comunicación de Crespo y el fiscal de turno fue en un momento en que diversos testigos que formaron parte del procedimiento policial y el propio acusado indicaron ya estar en dependencias de la 54° Comisaría de Huechuraba por lo que no era plausible que otro funcionario haya tenido que apreciar algún letrero para poder situar el sector. Refiere luego los dichos del testigo Christian Magna y Héctor Navarrete en cuanto afirman que la dependencia municipal desde la cual se sustrajeron especies corresponde a las oficinas de la OMIL que se encontraba en la otra vereda, frente a la construcción del edificio consistorial.

En cuanto a la acreditación inconsistente del paso de la víctima por el costado derecho del vehículo policial justo en el momento del disparo, reproduce aquí lo que señala la sentencia sobre este aspecto e introduce una imagen de la fotografía N° 11 acompañada por la defensa que sitúa el carro policial, el lugar donde estaba el forado y el lugar desde donde provenían los disparos, y refiere que ello supone que la víctima pasa por el costado derecho del vehículo siendo allí herido, sin embargo ello implica que la víctima teniendo la posibilidad de huir hacia el poniente o arrancar hacia el norte por la parte posterior del J, decide correr hacia Carabineros y hacia el humo de granada



lacrimógena que el acusado indicó haber arrojado como disuasivo previo al disparo; que si es efectivo que desde las palmeras había fogonazos, la víctima dirige su escape en una línea de fuego potencialmente letal. Agrega que esto no es posible compartirlo desde un punto de vista lógico y empírico puesto que una persona que acaba de cometer desórdenes públicos o como insinuó el acusado, delitos de robo, va a buscar a toda costa evitar acercarse al personal policial que lo puede aprehender, e intentará alejarse de los disparos y no acercarse como dice la sentencia.

En cuanto a la acreditación incompleta de la forma en que el acusado efectúa el disparo. Se señala aquí que la sentencia dio por acreditada la forma en que el acusado describe se hizo el disparo, es decir, desde atrás hacia adelante siguiendo la dinámica del ejercicio realizado en el recinto de Los Álamos y cuyo ejemplo se ilustra en la fotografía N° 23 y su imagen se inserta en el recurso, obviando que de acuerdo a la naturaleza de las heridas de la víctima, el disparo se efectuó de adelante hacia atrás y no de atrás hacia adelante como erróneamente concluyen, y agrega que también debió considerarse que el disparo se efectuó a una distancia de 3 metros  $\pm 0,5$ , por lo que se infringió los conocimientos científicos que se pudieron aplicar en el juicio.

En cuanto a la determinación incorrecta de la falta de visibilidad en el sitio del suceso, para lo cual se vuelve a reproducir la respectiva parte del fallo, se indica que la sentencia con infracción a las reglas de la lógica estableció que en el sitio del suceso la luminaria artificial se encontraba cortada, en circunstancias que los testigos declararon en general que en dicha esquina se encontraba funcionando la luminaria pública. Señala así lo que dijo la víctima, el testigo Nicolás López, lo que dice el acusado en



cuanto a que dos o tres cuadras más hacia el oriente existía luz artificial, lo que dice el capitán Cristóbal Rivera que dice que en el seguimiento había una calle que tenía como un parquecito, una avenida central, hacia el oriente, donde había luz y que del parque hacia ellos estaba todo oscuro, Concluye así el recurrente que es contrario al principio de corroboración afirmar que el sitio del suceso carecía de visión.

Respecto de la determinación incorrecta del lugar de detención de Nicolás López en cuanto a que éste no habría sido detenido con la víctima sino por el teniente Brian Vidal Beltrán junto a un adolescente de 16 años llamado Ricardo Díaz Avendaño varias cuadras más al oriente por camino El Bosque de Santiago, indicándose que ello no es así, alude a la declaración del médico Patricio López Vásquez que dio cuenta que el detenido presentaba una erosión en el dorso, y aclaró que ello era en la parte de la espalda entre el cuello y la parte baja de la columna lo que es compatible con la patada que Nicolás López dijo recibir en su detención junto a la víctima y que nunca indicó haber tropezado durante su huida y que siempre atribuyó la caída a la patada que recibió en momentos coetáneos al disparo que recibe Ettien.

En relación a la acreditación injustificada de la esquina de Camino Al Bosque de Santiago con República de Panamá como “lugar seguro”, se sostiene por el recurrente que se razonó en forma contraria a criterios lógicos y empíricos, al establecerse en el fallo que un lugar seguro era uno con luminosidad, lo que para ser cierto significa que no había otro lugar que tuviese condiciones de luminosidad y que dicho lugar estuviese a una distancia similar o más cercana a la intersección de Camino Al Bosque de Santiago con República de Santiago, en circunstancias



que la prueba rendida dio cuenta que el SAR la Pincoya como la propia Comisaría 54° contaban con luz eléctrica en el momento en que ocurrieron los hechos y que ambos se encontraban a distancias similares según los testigos que se detallan e incluso se cita la declaración del propio acusado que dijo que vio a la persona herida y se percató de las lesiones en su rostro. De esta forma refiere que es contrario a la lógica y no existe una razón suficiente de sus fundamentos incurriendo en contradicciones establecer que entre trasladar a una persona herida a un lugar conocido como la Comisaría, o donde pueda ser tratada como el SAR La Pincoya se optó por un lugar desconocido y al que incluso habían huido personas que habían formado parte de los ataques a Carabineros.

**32°)** Que enseguida el recurrente explica la trascendencia de la causal, y dice que de haber valorado la prueba testimonial, pericial y la evidencia producida necesariamente debió descartarse la tesis del acusado y, en cambio, debió establecerse que el sitio del suceso era el que señalan los acusadores, debió descartarse también el recorrido de la víctima por el costado derecho del vehículo policial, habría establecido la dinámica del disparo, tampoco podía darse por cierta la versión del acusado sobre el desconocimiento de la infidelidad de su conducta; ni que el testigo López fue detenido en un lugar distinto que la víctima y habría descartado que la intersección de Camino Al Bosque de Santiago con República de Panamá no era un lugar seguro sino el sitio del suceso y como consecuencia de ello habría condenado al acusado por los delitos que se le imputaron.

Finaliza solicitando la anulación del juicio y de la sentencia y que se proceda a la realización de un nuevo juicio por tribunal no inhabilitado.



**33°)** Que como se adelantó las dos causales de nulidad que el Consejo de Defensa del Estado impetró en forma principal, lo fueron de manera conjunta, siendo ésta una de las posibilidades que contempla el artículo 378 del Código Procesal Penal. Esta forma de plantear los vicios de nulidad implica que todos ellos coexisten a la vez, en otras palabras, es el conjunto de vicios que se denuncia el que lleva a la anulación de lo decidido.

**34°)** Que antes de analizar estos capítulos de nulidades, se estima relevante dejar asentado que de la lectura de la sentencia y del recurso de nulidad es posible advertir que hubo dos hipótesis –la de los acusadores y la de la defensa- en orden al lugar o intersección de calles en donde se efectuó el disparo a la víctima y así las pruebas rendidas por cada interviniente intentaron demostrar la efectividad de lo que cada uno planteó. El tribunal, por mayoría, aceptó que el lugar fue el que indicó el acusado y ello, en términos generales permitió también justificar el disparo y concluir que las lesiones de la víctima fueron ocasionadas accidentalmente al cruzarse en la línea de fuego.

La dificultad que enfrentó el tribunal para determinar qué fue lo que realmente sucedió es explicada a partir de la página 206 del fallo en donde se indica que los hechos son del año 2018, que en su momento se comunicó la decisión de no perseverar y que la causa se reabrió, comenzando nuevamente a investigarse dos años después (año 2020). Esta circunstancia, admite el tribunal, tiene sus consecuencias como pérdida de medios probatorios relevantes, evidencias, alteración de los recuerdos de los testigos. Así, añade el fallo, después de dos años ya no tiene sentido ir al pasaje República de Panamá a preguntar a vecinos si la madrugada del 30 de marzo de 2018 sintieron disparos, tampoco van a existir rastros de sangre en los sitios del suceso que





acusado y acusadores plantean como tal; el orificio del edificio consistorial tampoco está, ni la pared divisoria mientras estaba en construcción, pero lo más relevante los recuerdos de los tripulantes del J-030, del J-031 y de los funcionarios de la sección 19 “evidentemente no van a ser los mismos” dada la gran cantidad de procedimientos que adoptan, a ello se suma, que fueron a declarar en el juicio entre abril y mayo de 2024. A esa época también se perdieron los registros de las cámaras, como la del Sprinter B511 y de conversaciones radiales y por último nunca se tomó contacto ni se entrevistó testigos que eran relevantes como Ricardo Díaz, Miguel Contreras y Natalie Veloso ni al mayor Guzmán, indicándose por el tribunal que sobre todo el primer testigo -Ricardo Díaz- era fundamental, pues él fue detenido -según la policía- junto con Nicolás López, en circunstancias que los acusadores refieren que López fue detenido con la víctima Ettien Gutiérrez y no con Díaz.

¿Por qué se hace referencia a esto?, porque el trabajo del tribunal no fue fácil para intentar reconstruir –conforme a la prueba- y dentro de los límites que imponen las acusaciones lo que sucedió, optándose finalmente por absolver al acusado al no haberse alcanzado la convicción necesaria, más allá de toda duda razonable, que realmente el acusado había cometido los ilícitos por el que se le acusó.

**35°)** Que también es importante recordar una y otra vez, que en el sistema procesal penal que nos rige la investigación es previa al juicio y por ello, solo una vez concluida se da paso a la acusación, correspondiendo que en el juicio se rinda la prueba ofrecida para demostrar la tesis acusatoria, quedando prohibido alterar los hechos de la acusación indicándose expresamente por el legislador en el artículo 341 que está prohibido condenar por



hechos o circunstancias no contenidos en ella –como se dijo ya a propósito del recurso de nulidad del ministerio público-.

**36°)** Que el Consejo de Defensa del Estado a través de los distintos capítulos expuestos en sus dos causales de nulidad, reprocha en términos generales que las conclusiones de la sentencia no tienen una razón suficiente para ser así, acusándose de vulneraciones a las máximas de la experiencia, a los conocimientos científicamente aceptados o a la falta de ponderación de determinada prueba o no hacerse cargo de determinados planteamientos.

Sin embargo, todos estos reproches carecen de asidero, pues de la sola lectura del fallo puede verse cómo en la extensa sentencia dictada, el tribunal tuvo la precaución de ir explicando cada conclusión relevante para demostrar por qué no logró la convicción para condenar.

Dentro de este escenario el recurso en análisis lo que hace es simplemente un reproche de mérito y una invitación a revisar en forma directa la prueba del juicio –tanto es así que gran cantidad de ella fue ofrecida en el recurso- para que con una mirada distinta pueda arribarse a conclusiones afines a la acusación, sin embargo un recurso de nulidad tiene un estándar superior, pues debe demostrarse que realmente existe un vicio que lleva irremediablemente a anular todo, por ello cuando se acusa una infracción a la sana crítica es porque realmente las conclusiones no tienen alguna razón que pueda justificarlas o que ellas sean contrarias al sentido común o a la opinión experta de un perito pero siempre respetando un límite –la acusación-.

De esta forma aun cuando esta Corte pudiera no compartir algunos razonamientos del tribunal ello no conduce necesariamente a la nulidad pues el proceso penal descansa en



un principio de congruencia de tal suerte que, ante una infracción a las reglas de apreciación de la prueba, debe surgir del análisis correcto un hecho relevante directamente relacionado con la acusación que se formuló en el juicio y de ahí la trascendencia que exige la causal de nulidad para anular un juicio y una sentencia.

**37°)** Que así en relación al sitio del suceso la sentencia explica la referencia que se hace en el procedimiento adoptado en cuanto a que el acusado mencionó el número 492 del camino El Bosque de Santiago de la comuna de Huechuraba y ello se explica en las páginas 240 y 241 refiriendo que el acusado Crespo no conocía el lugar, expresándose que eso es lógico pues le pidieron de manera intempestiva que concurriera a Huechuraba, que el número del lugar lo consultó a otra persona, que según el testigo que se cita, el lugar tiene número por calle Premio Nobel, que el parte de detenidos hace también referencia a esa numeración -492- pero según la diligencia da cuenta de un lugar sin número, citándose además a otros testigos de la municipalidad que dan cuenta de donde se ubicaba el edificio consistorial, concluyéndose así por el tribunal que el lugar al que se refería el acusado era donde estaba situado el orificio del edificio consistorial a esa época en construcción, por lo que se estimó que la circunstancia que se le haya asignado el número 492 era plausible porque solo había muro perimetral con plantas OSB por lo que no existía numeración. A ello se agrega que en la página 281 del fallo en la letra D se cita un audio referente a la comunicación radial que el acusado Crespo hizo la noche de los hechos al fiscal de turno, advirtiéndose que Crespo –dice el fallo- no conocía la zona y “él era quien consultaba a otra persona allí presente por direcciones”. Cabe señalar además que la sentencia dejó constancia que el



audio era de muy baja calidad y estaba desfasado. Pero además en la página 272 la sentencia releva que se omitió en la acusación que Claudio Crespo concurrió a la Pincoya a raíz de que un funcionario de la 28° Comisaría de Renca había sido herido a bala y que por ello Crespo concurrió a la zona crítica de Huechuraba en reemplazo del mayor Mayer. Todas estas fundamentaciones cumplen con el estándar de suficiencia, advirtiéndose que el recurrente de nulidad simplemente entra en desacuerdo con los argumentos del tribunal, siendo ello comprensible pero insuficiente para anular los razonamientos.

En cuanto a la fijación de versiones a que alude el recurso conforme a lo que refieren las acusaciones, esto es en camino El Bosque de Santiago con República de Panamá y el supuesto fin ganancial que el fallo atribuye a la víctima y al testigo López, el recurso dice que no se da una razón suficiente para aseverar esta finalidad. Ahora bien, el fallo explica cuál podría ser la ganancia de la víctima y el testigo y la radica en obtener un fallo condenatorio del imputado. Al respecto, es cierto que tal finalidad que aduce el fallo carece de plausibilidad y menos puede ser adjudicada a quien ha sufrido objetivamente lesiones graves en su rostro, por cuanto la víctima no ha hecho más que ejercer las herramientas que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para que la imputación que él hace sea resuelta por la judicatura.

Con todo, aun prescindiendo de la finalidad que señala la sentencia no es ese fin la única razón que el tribunal esgrime como sustento de su decisión absolutoria sino que releva una serie de contradicciones de la víctima y el testigo López que impidió reconstruir los hechos en la forma que los presentan los acusadores, y por ello el fallo da cuenta que hubo necesidad de hacer dos fijaciones de versiones de la víctima y su testigo,



enumerando esas contradicciones a partir de la página 245 e incluso la sentencia da cuenta cómo se invirtieron recursos públicos para acreditar la versión de la víctima y su testigo, abocándose a probar dicha dinámica con prescindencia de la versión del acusado pues en cuanto a él -dice el fallo (página 259)- sólo se consideró lo que le dijo al fiscal de turno en el llamado realizado el día de los hechos, la constancia de un libro de patrulla y una declaración ante una asistente de fiscal en el año 2018, sin que después que se reabriera la causa se le tomara declaración, no realizándose ninguna pericia balística con su versión, ni habiéndose llevado a cabo una diligencia de “fijación de versión” por parte de la PDI, tales argumentos son suficientemente explicativos de la decisión del tribunal.

En cuanto a cómo fueron ponderadas las declaraciones de los testigos Cancino y Candia, tales reproches solo son un desacuerdo de argumentos pero no una falta a la razón suficiente.

En cuanto a que el tribunal no se habría hecho cargo de la encerrona a la víctima y al testigo Nicolás López, el tribunal sí lo aborda en la página 283 y da los argumentos para descartarla, pues ella suponía la participación de dos vehículos policiales el J-030 y J-031 e implicaría *que el primero “tendría que haberse dado una vuelta prácticamente a la velocidad de la luz por algún pasaje aledaño para haber llegado en forma inmediatamente posterior a la patada del conductor para propinar esta brutal golpiza a Nicolás López –o se bajaron en forma muy rápida corriendo por todo el pasaje República de Panamá situación tampoco narrada por Ettien Gutiérrez”.*

En cuanto al riesgo al que se habrían visto enfrentados los funcionarios de Carabineros al momento del disparo, el recurrente cita parte de testimonios para intentar demostrar que no había



riesgo alguno, pero ello solo constituye un ejercicio de ponderación, cuestión insuficiente para atribuir falta de fundamentación a la sentencia que arriba a la conclusión contraria, por lo demás, de los párrafos transcritos debe diferenciarse el riesgo que la policía aseveró existir en el lugar del forado del edificio consistorial de lo que ocurría en el denominado “lugar seguro”.

En cuanto a las versiones acomodaticias que habría efectuado el acusado el tribunal las analiza a partir de la página 280 e indica que nunca se dio la posibilidad que Crespo declarara como corresponde en esta investigación y sostiene que desde el inicio él dijo que sintió disparos lo que fue ratificado por la patrulla, también aborda el tiempo que demoró en denunciar el hecho, se analiza la cuestión de haber presentado documentos incompletos calificando el hecho como error y se dice que no consta que el acusado haya tenido conocimiento de que existían dos documentos similares o que deliberadamente haya decidido omitir uno, explicaciones todas que son razón suficiente para abordar el cuestionamiento que se hizo a las versiones acomodaticias.

Respecto de la desestimación de la distancia y trayectoria del disparo que produjo lesión en la víctima indicándose que no existe razón suficiente para la hipótesis acogida por el tribunal, basta para desechar tal reproche que la hipótesis que se señala en el recurso, como ya se dijo también a propósito del recurso del Ministerio Público, no es congruente con la acusación porque pasa por aceptar la ubicación que la víctima refiere haber tenido cuando recibe el disparo –adelante del vehículo policial- en circunstancias que las acusaciones le sitúan en el costado derecho del referido vehículo y esa incongruencia radical hace decaer esta causal de nulidad.



38°) Que en relación a la segunda causal de nulidad –opuesta en forma conjunta- no puede tampoco prosperar porque para su éxito necesita de la primera, ya que por ella se cuestiona, entre otros aspectos, que la sentencia haya establecido el paso de la víctima por el costado derecho del vehículo policial justo en el momento en que recibe el disparo, olvidándose que la acusación precisamente refiere tal secuencia de hechos, como consta de la reproducción del libelo acusatorio del Consejo de Defensa del Estado en la página 7 de la sentencia que en lo pertinente dice “...Al comenzar a retirarse del lugar, específicamente en calle REPUBLICA DE PANAMA con CAMINO EL BOSQUE, la víctima junto a un tercero, don NICOLAS LOPEZ HERNANDEZ, observa un VEHÍCULO tipo ZORRILLO de CARABINEROS cruzado en DIAGONAL en la calzada (el que resulta ser el VEHICULO J-031), por lo que decide pasar corriendo por el lado DERECHO del referido MOVIL, y al llegar a la altura del tercio delantero del mismo, escucha un disparo, y recibe en su CARA, BOCA Y CUELLO...”.(énfasis agregado para mayor claridad).

De igual modo la crítica que se hace a la forma de acreditar en la sentencia que el disparo fue de atrás hacia adelante, intentando con la prueba que se cita que fue al revés, tal planteamiento no es congruente con la acusación y ello lo explica en forma absolutamente prístina el fallo en la página 242 cuando alude a los dos errores que detecta en la acusación, sin embargo el recurrente de nulidad nada dice sobre ello silenciando esta problemática de la que da cuenta la sentencia.

Aun cuando lo ya dicho es de suyo suficiente para rechazar la segunda causal de nulidad, tampoco se observa una deficiencia de fundamentación respecto de la falta de visibilidad en el sitio del



suceso en cuanto a que la luz artificial estaría cortada, es más, incluso el recurrente de nulidad dice que los testigos que declararon en el juicio “fueron en general contestes” que la luz no estaba cortada, pero tal como dice fue “en general” pues la sentencia basándose en los testimonios policiales da por cierto lo contrario y ello es solo una cuestión de ponderación más no de insuficiencia de argumentos. De igual modo en la determinación del lugar de detención del testigo Nicolás López, el tribunal se encarga de explicar por qué no se convence con lo declarado por este testigo y ello dada sus contradicciones que se encarga de detallar a partir de la página 245 de la sentencia en adelante. Finalmente en cuanto a la determinación del denominado “lugar seguro” aquello también fue cuestionado por el Ministerio Público por lo que deberá estarse a lo que se dijo respecto de este punto en el considerando 21°.

**39°)** Que por lo expuesto, las causales deducidas en forma conjunta deben ser desestimadas primero, porque no se observa un razonamiento del fallo deficiente, ilógico o contrario a las máximas de la experiencia o a los conocimientos científicamente afianzados, verificándose que al amparo de estas causales simplemente existe un desacuerdo con lo resuelto pero ello no sirve para anular un juicio y una sentencia, pretendiéndose como se dijo antes, que esta Corte pondere directamente toda la prueba ofrecida como si se tratase de un nuevo juicio sin que tal pretensión sea factible. En segundo lugar, tampoco podría prosperar el recurso porque la tesis que se pretende establecer como verdadera es incompatible con la acusación de autos y ello legalmente es inadmisibile.

## **B. De la causal de nulidad subsidiaria**





**40°)** Que el Consejo de Defensa del Estado en forma subsidiaria a las dos causales conjuntas, sostuvo que el fallo incurrió en la causal de nulidad del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, al descartarse de manera equivocada la concurrencia de dolo en el delito de apremios ilegítimos.

Explica que para descartar el dolo el tribunal en el considerando 14° consideró la conducta posterior de Claudio Crespo en cuanto habría trasladado en forma inmediata a la víctima a un lugar seguro, pidió que llegara el Sprinter y lo trasladaron al centro asistencial, informó a sus subalternos de manera inmediata que él causó las lesiones con la escopeta antidisturbios, después informó a sus superiores y al mando y al fiscal de turno, concluyendo el fallo que el acusado no quiso herir a la víctima que pasó corriendo por el costado derecho del J031 – como lo sindicaba la misma acusación- de manera intempestiva, indicándose que difícilmente podría haber visto a Ettien Gutiérrez al momento del disparo, simplemente se cruzó y el disparo fue ocasionado de manera accidental.

Afirma el recurrente que el dolo debe ser actual por lo que los conocimientos e intencionalidades posteriores a la acción típica no son relevantes para la imputación subjetiva a nivel de tipicidad sino que debe centrarse el análisis al momento de la ejecución típica para lo cual cita doctrina.

Explica que el yerro tiene influencia en lo decidido, desde que si no se hubiera cometido, el tribunal habría dado por concurrente el elemento subjetivo en el actuar del acusado respecto del delito de apremios ilegítimos.

**41°)** Que la causal de nulidad interpuesta necesita la aceptación de los hechos fijados en la sentencia, es decir, el control sobre la correcta aplicación del derecho descansa en una



base fáctica inamovible, de tal suerte que no es posible para su éxito modificar, adicionar o restar circunstancias fácticas que el tribunal ya dio por acreditadas.

Dentro de esa línea la sentencia en sus páginas 319 y 320 establece los hechos acreditados y en lo pertinente al disparo dice:

*“Es así que Claudio Crespo Guzmán, mientras se encontraba patrullando en el vehículo Tango Romeo J031 por avenida Recoleta hacia el norte de la 54 Comisaría, recibió un comunicado radial alrededor de las 02:15 horas, en cuanto a que en el referido edificio consistorial se estaba efectuando un intento de saqueo y se encontraba en su interior un guardia de seguridad, razón por la cual concurrieron en el vehículo J031 hasta el referido lugar, pudiendo observar un forado en un muro perimetral del edificio consistorial en construcción, ubicado en camino El Bosque de Santiago antes de la intersección con pasaje República de Estados Unidos, desde el cual sujetos desconocidos salían desde su interior, por lo que Claudio Crespo Guzmán utilizó una granada de mano de gas CS de triple acción, pero a raíz de que se escucharon disparos al parecer con arma de fuego, provenientes desde un grupo que se encontraba cerca de la referida intersección, **Claudio Fernando Crespo Guzmán**, desde la tronera ubicada en la puerta del copiloto del vehículo J031 y con la puerta cerrada, disparó con su escopeta antidisturbios marca Hatsan, modelo Escort, calibre 12 milímetros, en dirección desde donde venían los disparos a raíz de que por la parte posterior del vehículo J031, en calle Premio Nobel, se encontraban funcionarios de la sección 19 de Fuerzas Especiales de infantería, siendo impactado Ettien Gutiérrez Arias en su rostro, quien justo en ese momento pasó corriendo por el costado*



*derecho del referido móvil con una bandana que cubría gran parte de su rostro y además se encontraba la luminaria artificial cortada, recibiendo un disparo en su cara, boca y cuello, el impacto de 11 de los 12 perdigones o postas contenidos en el cartucho utilizado por la aludida escopeta antidisturbios.”.*

Como puede advertirse no es posible compatibilizar un actuar doloso con el hecho asentado en la sentencia en orden a que cuando el acusado dispara desde la tronera en dirección desde donde venían los disparos impacta a la víctima quien justo pasó corriendo por el costado derecho del móvil.

Nada hay en esta secuencia fáctica que permita aseverar la existencia de un actuar deliberado para dañar a la víctima, por ello, aunque la conducta posterior del acusado efectivamente no incide en el dolo, la causal de nulidad no tiene sustento alguno en los hechos fijados en el fallo.

Corroborando lo señalado los argumentos vertidos en la sentencia en la página 323 cuando dice “el disparo fue ocasionado de manera accidental” entonces ¿de qué dolo puede hablarse? el recurrente lo silencia.

Por lo anterior esta causal debe ser desechada y con ello el recurso de nulidad del Consejo de Defensa del Estado.

### **III. En cuanto al recurso de nulidad presentado por la víctima querellante y acusador particular**

**42°)** Que el abogado Sebastián Velásquez Díaz en representación de la víctima, sostiene que la sentencia incurre en el motivo absoluto de nulidad del artículo 374 letra e) en relación al artículo 342 letra c) y 297 del Código Procesal Penal, es decir, al deber de fundamentación de la sentencia. El libelo de nulidad lo divide en cuatro capítulos.



43°) Que como primer capítulo, el querellante acusa una manifestación de los sesgos de disponibilidad y de grupo en el razonamiento empleado por el tribunal, pues afirma que los argumentos de absolución se encuentran surcados por sesgos de cognición y contravenciones a las máximas de la experiencia y de la lógica surgiendo dudas –según dice- acerca de la imparcialidad.

Cita doctrina para explicar lo que se entiende por sesgos, por procedimiento heurístico de disponibilidad y por sesgo de grupo.

Explica que los sesgos de disponibilidad y de grupo se manifiestan con claridad en varios pasajes del considerando 14° pues no hay respaldo respecto de las afirmaciones que se hacen y que se fundan en la experiencia previa de las juzgadoras. Así en la página 201 del fallo se explicita que por su experiencia –la de las juezas- se considera normal en relación a la identidad de las declaraciones en el sumario realizado por la institución de Carabineros. Para ello se reproduce el párrafo pertinente. Añade que la imprecisión del fallo juega en favor del acusado, no solo por el claro sesgo institucional que propone ser comprensivo con lo que llaman “la realidad” sino porque confunde las declaraciones propias de un parte policial, a las declaraciones en una investigación sumaria de la propia institución, lo que no justifica en absoluto en relación a la práctica para ahorrar tiempo, según señala. Explica que es evidente que siendo juezas, dice el impugnante, han de contar con experiencia previa en procedimientos contenciosos, pero indica que los intervinientes no tienen cómo advertir qué grado de experiencia es ese si ni siquiera se hace referencias mínimas a los casos que las juezas tienen en mente al comparar los hechos del presente caso con aquellos, máxime –dice- si la comparación se realiza en relación a procedimientos administrativos y no judiciales. Se citan otros



párrafos del fallo en demostración de lo que se afirma en cuanto se alude a que el sumario administrativo en Carabineros fue incompleto al igual que la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público en el año 2018 diciendo que “ello no es responsabilidad del acusado”; o que en relación a las actas de Carabineros en que se alude al “cansancio que tienen los funcionarios después de la cantidad de horas trabajadas y sometidos a estrés”, y se evidencia con ello -dice el recurrente- que las magistradas fueron comprensivas con el acusado, atentando con ello al principio de razón suficiente, puesto que no hay más justificación que la sola reflexión de las sentenciadoras en torno a su propia percepción de la realidad que habrían vivido los carabineros. Se añade que en la página 323 el fallo dice que “no hay ninguna razón para que Claudio Crespo haya querido herir a Ettien Gutiérrez intencionalmente” o “que no tiene sentido querer herirlo a propósito, con todas las consecuencias que ello habría implicado para su trabajo”.

Estima el recurrente que se puede constatar que al valorar la prueba todo lo relativo al actuar de Carabineros goza de un trato benigno y comprensivo por el solo hecho de pertenecer a dicha institución, careciendo de fundamento o razón suficiente el trato privilegiado, construyendo argumentos de aseveraciones infundadas que contrarían las máximas de la experiencia, puesto que para constituirse como tales, aquellas no pueden descansar en meras apreciaciones personales ni en juicios de valor sobre escenarios hipotéticos.

**44°)** Que como segundo capítulo se alude a la presencia de razonamientos que contrarían el principio de razón suficiente en virtud de resultar discriminatorios, ilegales y/o vulneratorios de derechos humanos.



En primer término ello se verifica, según explica, en relación a la bandana que portaba la víctima y la suposición de que los funcionarios de Carabineros serían catalogados como inhumanos de haberla incautado. Se reproduce el párrafo correspondiente a por qué no se habría incautado la bandana que portaba la víctima diciendo el tribunal “Si no lo hicieron es porque con este elemento la víctima se cubrió la sangre del rostro cuando recibió el disparo. Evidentemente de habérsela quitado e incautado a los funcionarios se les habría tratado de inhumanos”. Se añade que esta aseveración es un invento y ficción pues no hubo ningún medio de prueba que hiciera presumible alguna situación que describe y se añade que el acusado en el propio juicio oral sostuvo que él reconoció a la víctima por la bandana, que la incautaron, cuestión que no fue cierta, sin que la sentencia dijera nada al respecto. Además, la suposición que hace el fallo respecto de que los funcionarios del J-031 o la sección 19 podrían haberla incautado, también constituye un invento ya que nadie aseveró lo que señalan.

Enseguida se aborda lo que denomina el recurrente como exigencias especiales –injustificadas- para la declaración del acusado y los funcionarios de carabineros que estaban en los respectivos vehículos tácticos, ello por cuanto el fallo dice que “jamás se le dio la posibilidad de que declarara como corresponde durante la investigación ante el Ministerio Público” o “Incluso los funcionarios más relevantes para este caso, los tripulantes de los vehículos J, solamente fueron entrevistados por PDI y no por algún fiscal o asistente de fiscal”. Se señala que resulta de interés que en el caso de la víctima y testigo, la primera declaración de Ettien Gutiérrez la tomó Eugenia Duffeau, asistente de fiscal y la declaración de Nicolás López también la



tomó la PDI, pero al ponderar estas declaraciones nada dicen las magistradas en cuanto a que no fueron declaraciones “como corresponde” o, que en el caso de Nicolás, debió hacerlas un fiscal o asistente de fiscal como lo exige para el acusado y su tripulación. Se agrega otro párrafo del fallo en cuanto considera las jornadas de trabajo de los funcionarios de fuerzas especiales esa noche en cuanto se alude al cansancio y tensión que deben haber sentido los carabineros, aludiendo a las barricadas, a los artículos incendiarios e indicando que Cristóbal Rivera habría señalado que la zona parecía una Segunda Guerra Mundial, todo cortado. Estima el recurrente que esta comparación exagerada de la que no hay cuestionamiento por el tribunal fue considerada como probada y agrega que es una lástima que no pudiera gozar de la misma comprensión un muchacho como Nicolás López quien describió la golpiza decidiéndose quitar credibilidad a su relato.

Enseguida, el recurso aborda el tema de acceso a la justicia como ganancia secundaria, para lo cual reproduce el párrafo del fallo a que alude a que no es efectivo que la víctima y el testigo no tengan alguna ganancia secundaria para alterar el lugar del disparo o sitio del suceso por cuanto “lo que interesa a Ettien Gutiérrez es que se condene al acusado por el impacto de perdigones recibido en su rostro”. El párrafo que reproduce, el recurrente lo califica de castigador y vulneratorio con la víctima, además de injustificado, pues subvierte la naturaleza misma del proceso y el juicio a fin de establecer y conocer la verdad, tener acceso a la justicia y sancionar al responsable de aquello y añade que en ningún caso puede ser presentado como ganancia secundaria. Agrega que ello compromete la responsabilidad del Estado Chileno en cuanto a sus obligaciones internacionales,



refiriéndose luego al derecho de acceso a la justicia como temática de derechos fundamentales, da opinión doctrinaria y acude a jurisprudencia de la Corte Interamericana.

Posteriormente el recurso aborda el derecho de manifestación en cuanto a las condiciones que exigen las sentenciadoras. Se reproduce el párrafo de la sentencia en que se alude al tema de las manifestaciones al hablar de la jornada del día del joven combatiente, indicándose en el fallo que la manifestación debe ser autorizada de forma previa por la autoridad competente, se realizan de día y de manera pacífica. Se indica en el recurso que no existe norma que establezca que los requisitos de las manifestaciones son como declara la sentencia y refiere que se desconoce la regulación del Manual de Control del Orden Público, que se rindió en juicio y que distingue manifestaciones pacíficas y manifestaciones violentas, vulnerándose estándares y normativa internacional haciendo cita del Informe de la CIDH sobre “Protesta y Derechos Humanos. Estándares sobre derechos involucrados en la protesta social y obligaciones que deben guiar la respuesta estatal”, reproduciendo sus principios rectores, para luego citar el informe de la CIDH sobre “Situación de Derechos Humanos en Chile” y concluir que Ettien sigue siendo población civil víctima, ante una policía militarizada que dispara en contra de su rostro, lo que no fue considerado por la mayoría del tribunal.

Luego alude a razonamientos en relación al Protocolo de Estambul, aquí se hace referencia a la parte de la sentencia en que se dice “A mayor abundamiento” un análisis sobre las secuelas psicológicas y la pericia presentada por la perito Alejandra Ximena Rodríguez Morales, evidenciando una contradicción interna en el desarrollo de su razonamiento, ratificando el sesgo – según el recurrente- y con ignorancia





técnica de parte del tribunal. Para ello se reproduce la parte pertinente de la sentencia en la página 270 en donde se dice que evidentemente una persona –sobre todo joven- va a quedar con secuela psicológica a raíz de los hechos para luego decir que no se puede considerar la pericia como medio probatorio fehaciente, más allá, de toda duda razonable, de que Ettien Gutiérrez tuvo secuela psicológicas a raíz de los hechos narrados del modo en que él lo indicó. Refiere el recurrente que aquello constituye una clara contradicción interna en el razonamiento, para enseguida señalar que en el desarrollo de cuatro puntos se destaca que la víctima habría negado el consumo previo de marihuana y que en el examen físico del médico Jorge Linares titulado “Quejas psicológicas” Ettien nada había referido. De lo anterior, concluye el recurrente que para el tribunal recibir 11 perdigones en el rostro dejaría secuelas psicológicas, sin embargo en una situación de sesgo hacia la víctima buscan descalificarlo por un consumo ocasional de marihuana que estaría en su ficha de ingreso lo que está fuera de todo orden de razonamiento en relación a medir el daño ocasionado por el hecho acontecido. Luego hace una crítica en cuanto a la ignorancia técnica en cuanto a que el tribunal no logra distinguir un protocolo de Estambul físico y uno psicológico ni la necesidad de ambos exámenes y que el físico por más que tenga un acápite de “Quejas psicológicas” no corresponde a un examen psicológico según el protocolo de Estambul. Reitera que si el protocolo no se efectuó de manera adecuada, no cumple con los estándares internacionales y con la debida diligencia. Expresa que esto está en los instructivos de la fiscalía y fue una de las razones por las que, en el control jurisdiccional de la decisión administrativa de no perseverar de la fiscalía, ello fue revertido. Añade que su parte solicitó que fuera el órgano jurisdiccional



quien oficiara a la Fiscalía Regional porque el fiscal José Morales había incumplido su propio oficio. Dice que esto está en el *ebook* de la causa y en el acta que acompaña. Refiere que esto es importante porque el protocolo de Estambul es un instrumento que da un tratamiento como víctima a quien denuncia estos hechos. Así indica que debe ponderarse como una corroboración de los hechos relatados por la víctima. Alude a la declaración de la perito Alejandra Rodríguez Morales y lo que observó con esta prueba aplicada a la víctima, en cambio, sostiene que el tribunal incurrió en un razonamiento discriminatorio, invisibilizador y sesgado de la víctima, revictimizante y que buscó desacreditarlo artificialmente olvidando que la búsqueda de la verdad, el tratamiento adecuado a la víctima y la sanción de los responsables en causa de derechos humanos, construyen las garantías de no repetición, que en este caso son particularmente relevantes.

**45°)** Como tercer capítulo, se denuncia una ausencia de valoración racional de la prueba y conclusiones infundadas, que vacían de contenido a la decisión absolutoria. Explica que el fallo da por probadas situaciones que no son ciertas y, por el otro, intenta ponderar con valor jurisdiccional decisiones administrativas.

Primero, dice que se dio por probada situaciones que no son efectivas como dar por probado los dichos de José Morales de que al momento de comunicar la decisión de no perseverar, constaba la autorización del Fiscal Regional. Refiere que ello no es así y acompaña el acta de la audiencia de reapertura de 14 de febrero de 2020, donde consta el oficio por incumplimiento al oficio 895/2017 de la Fiscalía Nacional de no contar la autorización del Fiscal Regional al momento del cierre de la



investigación. Añade que las sentenciadoras exhibieron como primera particularidad del caso que se había tomado la decisión de no perseverar y que dicha decisión fue autorizada por el Fiscal Regional, para ello alude a la página 205 del fallo en donde se hace referencia a esta decisión de no perseverar la que debió pasar por el control de la Fiscalía Regional y sus asesores, que en su caso nadie le cuestionó la decisión, aprobándose finalmente, en circunstancias que el acta de la audiencia de 14 de febrero de 2020, donde se discutió la reapertura el tribunal acogió la solicitud del Instituto de Derechos Humanos ordenando oficiar al Ministerio Público informando el incumplimiento al oficio 895/2017, asimismo, del cierre de la investigación, sin autorización del fiscal regional.

Enseguida alude a que se da por probado el supuesto hostigamiento hacia los funcionarios de Carabineros durante la investigación, en las páginas 208 y 209 del fallo, en cuanto refiere, citándose al testigo Jaime Cancino, la forma en que fueron tratados por la PDI cuando fueron interrogados, con hostigamiento, con un sesgo de odiosidad, interrumpiendo las respuestas mediante el bombardeo de preguntas, exhibiendo mapas del sitio del suceso que no eran claras. Enseguida alude al voto de minoría en la página 342 en cuanto sostuvo que no era creíble que testigos oficiales y suboficiales de carabineros, habituados a declarar y tomar declaración, se dejaran presionar para decir aquello que no querían decir o para poner en sus declaraciones afirmaciones que no eran suyas.

Posteriormente se alude al hecho de encuadrar la ponderación de decisiones administrativas como decisiones jurisdiccionales en referencia a las resoluciones provenientes del sumario y a la decisión de no perseverar. Se señala que ello fue vulneratorio



para la víctima y no se entiende por qué considerar un sumario cuestionado por la parte acusadora por el sesgo y la falta de imparcialidad pero que además vela por eventuales sanciones administrativas que son independientes de la responsabilidad penal, demostrándose en el juicio las deficiencias que tenía como prueba en favor del acusado.

**46°)** Que como cuarto capítulo se alude a la ausencia de valoración de medios de prueba específicamente pericial relativo a las lesiones de la víctima, en abierta contravención a los conocimientos científicamente afianzados en la medicina y al principio de no contradicción. Alude el recurrente al alegato de clausura del Ministerio Público mencionado en la página 96 de la sentencia donde se dice que son contradictorias la prueba sobre las lesiones de la víctima acorde las conclusiones de la doctora Cerda y las demás probanzas, entre estas, lo señalado por el perito Bustamante indicándose que la pérdida de la pieza dental que se aprecia en la fotografía 4 del otro medio de prueba N° 9 es producto del impacto de la posta que se describió, en ese mismo alegato, plasmado en la hoja 116, donde el Ministerio Público da cuenta de la coherencia entre lo referido por el perito Bustamante y la perito González y que es posible inferir la trayectoria del proyectil que lesionó a Ettien citando al perito Bustamante. Luego el Consejo de Defensa del Estado en su alegato de clausura aludió al perito Bustamante, González y Rinche, donde se alude a la posición del J-031, a la categorización de las lesiones, que la versión de la perito Cerda sobre la distancia superior a 5 metros entre víctima y victimario no era posible y a la estatura de Ettien y la zona de los impactos o cicatrices. Se alude a que la sentencia sostuvo que las lesiones fueron graves. Se indica que en el considerando 15° sobre la prueba no valorada no se alude a la



declaración del señor Bustamante. Cita el voto minoritario que da cuenta que no se valoró por la mayoría las declaraciones del perito Bustamante a pesar que en los alegatos de clausura se aludió a dicha probanza, que permitía dar cuenta de la distancia del tirador en relación a la víctima y la trayectoria del proyectil nada de lo que fue tomado en consideración por el fallo, invisibilizándose dicha prueba. Añade que se atenta al principio de no contradicción pues no puede acreditarse las lesiones sin atender también a la modalidad con que fueron causadas ya que el diagnóstico del perito Bustamante constituye un todo que no puede separarse, acreditándose sólo los efectos y no las causas.

**47°)** Que por todo lo expuesto el querellante solicita la nulidad del juicio y de la sentencia, determinándose el estado en que debe quedar el procedimiento con la finalidad que un tribunal no inhabilitado disponga la realización de un nuevo juicio.

**48°)** Que como se ve, el recurso de nulidad del querellante particular que representa a la víctima reprocha diversas conclusiones, afirmaciones o razonamientos de la sentencia que considera ya sea constitutivos de sesgos, ya discriminatorios o vulneratorios hacia la víctima y sus derechos, ya contrarios a instrumentos internacionales o contrarios o en desconocimiento de las pruebas rendidas en el juicio.

Pues bien, el recurso de nulidad por cualquiera de sus causales debe ser capaz de demostrar la trascendencia del vicio que postula, esto es, debe explicar por qué dicho vicio tiene la fuerza de anular lo decidido cuestión que el libelo que ahora se analiza, no satisface, según se pasa a señalar.

**49°)** Que en efecto, aún eliminando todas aquellas partes de la sentencia respecto de las cuales se construye el recurso, aun así, vuelve a quedar incólume el principal problema o escollo que la



sentencia halló y que le impidió a la mayoría condenar, cual es, que la dinámica en cuanto a la forma en que se habría recibido el disparo dada la posición que la víctima y el testigo narraron ante el tribunal, esto es, pasando por delante del carro policial, entre éste y la casa esquina ubicada en calle El Bosque de Santiago y pasaje Panamá no se ajusta a la dinámica que todas las acusaciones –incluida la de quien representa a la víctima– plantearon ante el tribunal.

Entonces cabe preguntarse, ¿cómo soslayar el mandato del artículo 341 del Código Procesal Penal?, ¿Cómo podrían nuevos jueces en otro juicio, aceptando por cierta la dinámica propuesta por la víctima y el testigo condenar al acusado contrariando la acusación?, esa respuesta también se silencia por esta parte querellante que representa a la víctima y que como tal estaba en posición de conocer de primera fuente cómo realmente fue el encuentro entre Ettien Gutiérrez y el carro policial, por dónde fue que pasó cuando recibió el disparo y así plasmarse tales circunstancias en la acusación en consonancia con los dichos del joven a quien representa, sin embargo, el libelo acusatorio y los dichos de la víctima fueron disímiles.

**50°)** Por ello, las conclusiones que hizo el tribunal basándose en una experiencia de juicios que no se especifica mayormente o, los problemas en la investigación administrativa o al decir el fallo que la primera investigación que hizo el Ministerio Público no sería de responsabilidad del acusado o, las frases que aluden al cansancio que vivieron los funcionarios en la jornada en cuestión o, a que no habría razón para que el acusado quisiera herir a la víctima, constituyen aspectos que, aun aceptándose como equívocos o carentes de sustento y aun eliminándolos, no llevan por el contrario a destruir el principal argumento que dio la



sentencia para absolver y al que se ha hecho referencia en el considerando anterior.

Del mismo modo si la bandana fue o no incautada o, si se elimina la expresión “como corresponde” al analizar los hechos objetivos sobre las veces en que fue interrogado el acusado o en que declaró la víctima tampoco revierte el problema de encuadre de los hechos que la querellante necesita para la condena con aquellos por los que se acusó.

Incluso, desechando calificaciones subjetivas del por qué las partes -acusadores y defensa- presentan un sitio de suceso distinto y estableciéndose sin más que son simplemente hipótesis que cada uno requirió probar ante un tribunal no cambia el resultado de que éste no logró convicción suficiente para optar por el planteamiento de los acusadores dada la necesidad de convicción que exige el artículo 340 del Código Procesal Penal.

Mención aparte ha de hacerse sobre la ganancia secundaria que el tribunal atribuyó a la víctima para la modificación del sitio del suceso pues, ya se dijo en el considerando 37°, a propósito del recurso de nulidad del Consejo de Defensa del Estado, que aquello no resultaba plausible de esgrimir, pero eliminando tal atribución, era lo cierto que el tribunal había además enumerado una serie de contradicciones sobre el relato de la víctima y del testigo que impedían aceptar lo narrado, con lo que nuevamente se derrumbaba la hipótesis planteada por esa parte.

En cuanto a las condiciones que estimó el tribunal debían concurrir para estar frente a una “manifestación” y dando por cierto que la víctima y el testigo se manifestaban en la jornada del día del joven combatiente es lo cierto que la víctima, testigo y acusado coincidieron esa noche en la comuna de Huechuraba y que la víctima resultó gravemente lesionada en su rostro producto



del disparo que hizo el acusado y todos tuvieron que pasar por las exigencias propias del juicio oral en el que se intentó probar –por los acusadores- el actuar doloso del policía y –por la defensa- su inocencia, decidiéndose por mayoría, que no se logró el estándar de condena que exige el legislador procesal penal.

De la misma manera, en cuanto a las exigencias sobre el Protocolo de Estambul del que se acusa desconocimiento por parte de las juzgadoras, la pregunta es ¿cambia en algo el resultado de la sentencia? La respuesta es no, es más ni siquiera el impugnante alude a cómo podría haber modificado el resultado del juicio de haberlo aplicado en la forma como se desarrolla en el recurso. De hecho ya se ha dicho aquí que aceptando cabalmente la versión de la víctima, cuestión que el tribunal también se planteó como escenario factible (página 283 y 327) el problema es cómo adecuar esa versión con los hechos de la acusación y de eso nada se dice.

Respecto de si se obtuvo o no la autorización del Fiscal Regional para que, en su oportunidad, el fiscal de la causa decidiera no perseverar en la investigación de este caso o el supuesto hostigamiento de que habrían tenido funcionarios de la PDI al interrogar a los funcionarios de Carabineros o las consideraciones que pudo arrojar el sumario administrativo llevado a cabo, corresponde decir que acierta el recurrente cuando distingue entre la responsabilidad administrativa y la penal y es lo cierto que el juicio oral está consagrado para la última por lo que lo relevante para una condena o una absolución es si las pruebas logran o no demostrar los hechos y circunstancias contenidos en las respectivas acusaciones, de tal suerte que el documento acompañado por la parte recurrente ante esta Corte como prueba de las circunstancias invocadas en su recurso





carece de trascendencia si no se logra derribar la barrera que encontró el tribunal sobre la discordancia entre lo que se cree probar por los acusadores y lo que expresa cada acusación.

Finalmente, en este recurso como en los dos que anteceden se vuelve a criticar la falta de ponderación de los dichos del doctor Bustamante en cuanto a la trayectoria que habría tenido el disparo y los perdigones en consonancia con la fotografía de las lesiones de la víctima y la pérdida de una pieza dentaria pero, como ya se ha dicho tantas veces, esa hipótesis de disparo o trayectoria balística no fue incluida por ninguno de los acusadores, tampoco de quien emana el recurso de nulidad que ahora se analiza, imposibilitando que primero el tribunal y luego esta Corte utilicen esta prueba ya sea para haber condenado, ya para anular el juicio y el fallo pues su discordancia con las acusaciones no permite otra salida por impedirlo el ya mencionado artículo 341 del Código Procesal Penal.

**51°)** Que por todo lo anterior el presente recurso debe desestimarse pues sus reproches no logran suficiencia para anular.

#### **IV. En cuanto al recurso de nulidad presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos**

**52°)** Que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en adelante INDH, a través de la abogada Beatriz Contreras Reyes, sostiene que la sentencia impugnada incurre en el vicio de nulidad establecido en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 342 letra c) y 297 del mismo cuerpo legal.

Se afirma que la manera como se resolvió la cuestión se sustenta en un sesgo que se manifiesta de forma palmaria en el considerando 13° y en el considerando 14° ya que las juezas



asumen una posición equidistante con la víctima y el testigo Nicolás López que fue presencial de lo que ocurrió el 30 de marzo de 2018 en la comuna de Huechuraba.

Enseguida el recurso aborda la obligación de fundamentación de la sentencia, cita el artículo 297 del Código Procesal Penal y dice que el adjudicador se encuentra obligado a fallar conforme a toda la prueba rendida en el juicio de acuerdo a las reglas de la sana crítica, pero libre de prejuicios, sesgos y estereotipos, señala que a los sentenciadores les es exigible un estándar más alto y que es imposible para un operador del derecho, simple y profano, tener que sostener una sentencia solo en base al testimonio del acusado y funcionarios policiales que resultaron ser hostiles para la tesis de los acusadores. Luego se refiere al principio de razón suficiente y enseguida señala que la sentencia descarta de manera injustificada las probanzas de ciertos hechos sobre la base de argumentos confusos, contradictorios e insuficientes, fundándose en probanzas que tienen su origen en documentación elaborada de manera falaz, avalada en juicio por testimonios prestados por personal policial afín a los intereses del acusado, que en algunos casos cambiaron de un día para otro, lo que se traduce en que la sentencia se encuentre provista en exceso de contradicciones internas y errores lógicos que no guardan relación con lo acreditado por el conjunto de pruebas, afirmación que, encuentra sustento, dice, en el voto disidente. Posteriormente pasa a analizar los errores en la valoración de la prueba.

**53°)** Que en primer término alude a la errónea valoración del relato de la víctima y su credibilidad. Sostiene que la falta de credibilidad o confiabilidad que arguye el fallo no se basa en un análisis racional de la prueba rendida sino en prejuicios relacionados precisamente con su participación en desmanes o



desórdenes públicos en el denominado “día del joven combatiente”. Reproduce para ello la página 234 de la sentencia en el punto N° 1 en donde dice que Ettien Gutiérrez y Nicolás López estaban formando parte de los usuales desmanes y desórdenes graves en Huechuraba y señala que no se trataba de una persona que simplemente iba caminando en horas de la tarde hacia su domicilio después de una jornada de trabajo cuando recibe el disparo o que se encontraba en una manifestación pacífica y aclara que el contexto era el día del joven combatiente, pero no en un contexto de manifestación, sino que derechamente en desmanes y desórdenes graves. Luego reproduce parte de la página 329 de la sentencia en similares términos.

Refiere que ello quiere decir que Ettien Gutiérrez, víctima en este caso, fue situado sin tenerse en cuenta dicha condición, que requería por tanto protección y tutela judicial efectiva, sino desde el cuestionamiento a su calidad de tal, a propósito de su presencia en un lugar conflictivo, indicándose que la sentencia hizo suyo las calificaciones que dio el acusado cuando habló de insurrectos en relación a los manifestantes. Agrega que si bien la sentencia dice que no se encontró en poder de la víctima alguna pistola de aire comprimido, ni fósforos ni encendedor, luego añade que alguno de los sujetos que se dieron a la fuga podría haber portado alguno de estos elementos para encender las tablas, lo que es un mero supuesto de las juezas.

Sostiene que la configuración del prejuicio se desarrolla desde el inicio del razonamiento absolutorio y ello lleva a que no se valorara conforme a la sana crítica el relato de la víctima y del testigo Nicolás López Hernández presencial en los hechos, incluidos algunos funcionarios policiales que estuvieron en el sitio del suceso, cuyos testimonios resultaron ser parciales (sic) y sin



ánimo ganancial, así como las pruebas científicas que corroboraron su versión en estrados. Enseguida analiza diversos tópicos del fallo, según se pasa a detallar.

**54°)** En relación al lugar del disparo y la detención de la víctima. Reproduce la página 211 del fallo, en la que se refiere a la ganancia secundaria de la víctima en relación a querer castigar al acusado por los perdigones recibidos, en circunstancias que la víctima jamás expresó quién era el acusado o al menos una característica que diera cuenta de su identidad; de igual modo se alude a la ganancia del testigo Nicolás López imputándole querer ayudar a su amigo en circunstancias que ello no encuentra correlato con ningún antecedente probatorio rendido en el juicio. Añade que lo más llamativo es que la sentencia desatiende las declaraciones de otros testigos que incluso son funcionarios policiales y que dan fe que los hechos ocurrieron en el lugar que señala la víctima. Para ello reproduce las pistas de audios correspondientes a las declaraciones de Diego Sandoval Orellana, de Jaime Cancino Jara, de Gonzalo Arévalo Soto y de Cristián Lizama Loyola, para finalmente comparar cómo fue valorado el testimonio de la víctima por el voto disidente y se pregunta si es posible exigirle toda clase de precisiones y detalles a un ser humano que ha recibido la casi totalidad de los perdigones y el taco de plástico de un cartucho en la hemicara izquierda a corta distancia y que cae de rodillas y a quien parece que todo se nubla, respondiéndose que no y que ello lejos de restar credibilidad al relato de la víctima lo fortalece y con ello su afirmación corroborada por el testigo López en el sentido que el disparo realizado por el acusado ocurrió en Camino El Bosque de Santiago con calle República de Panamá. Se agrega que se olvidó por el tribunal, que a diferencia del acusado, la víctima



mantuvo el relato a lo largo de la investigación y que en estrados solo ratificó lo que siempre sostuvo desde un principio.

**55°)** Que en relación al nivel de riesgo para los funcionarios policiales que concurren al lugar. Afirma que la mayoría sostuvo que los funcionarios se encontraban siendo atacados casi de forma permanente con objetos contundentes y disparos, cita para ello la página 323 de la sentencia, no obstante, dice esa afirmación resulta errónea si se tiene en cuenta el lugar donde se hizo el disparo y la detención de la víctima a que se refirió en el punto anterior y alude nuevamente al voto disidente, citando en forma precisa los testimonios de funcionarios policiales concurrentes al sitio del suceso que corroboran el hecho de que no estuvieron en peligro inminente al momento del disparo.

**56°)** Que en cuanto a la forma en que se encontraban las puertas del vehículo táctico J031 al momento del disparo, especialmente la del copiloto, fue considerado como uno de los aspectos centrales del asunto, y atendido que el tribunal recibe información variada sobre el punto entiende que surge a lo menos una duda razonable. Aquí señala lo que dijo la sentencia en referencia a la perito Ximena González Gálvez que realizó distintos ejercicios con un vehículo PTRJ014, tanto con la puerta abierta como con la puerta cerrada para establecer la dinámica del disparo arribando a tres conclusiones reproduciendo esta parte de la sentencia.

Sin embargo dice, que llama la atención la conclusión de la mayoría que pasa por alto ciertas consideraciones del todo relevante y que detalla el voto de minoría, en orden a que la perito también sostuvo que bastaba girar levemente la posición del vehículo para que un disparo desde dentro del vehículo táctico fuera posible, cumpliéndose con la distancia dada por la



dispersión como también si el disparo se hace con la puerta abierta y el disparo se hace desde la tronera, habiéndose bajado del vehículo táctico indicándose que esta alternativa es compatible con una prueba presentada por la defensa consistente en la exhibición del Manual de operaciones de carro táctico del año 1989. Alude que incluso conforme a las máximas de la experiencia narra distintas alternativas de disparo concluyendo si es exigible a la víctima que recuerde desde donde le dispararon y si las puertas estaban abiertas o cerradas agregando cómo debió ser ese momento. Indica el recurrente que el voto disidente recoge su teoría del caso e indica que los sentenciadores deben reconstruir una historia plausible con los medios probatorios disponibles, cita doctrina al respecto. Concluye que el acomodaticio razonamiento de la sentencia de mayoría infringe las máximas de la experiencia.

**57°)** Que en cuanto a la distancia de las postas que impactan en el rostro de la víctima. Se cita aquí la página 223 de la sentencia la que se reproduce y luego se indica que la sentencia no se hace cargo del elemento trayectoria que es fundamental para darle sentido a la dinámica de los hechos propuesta por los acusadores y comprender a su vez la forma en que se encontraba la víctima y el acusado y hace cita del voto disidente que concluye que la trayectoria del disparo fue de adelante hacia atrás lo que corrobora la versión de la víctima en el juicio y torna físicamente imposible la tesis de la defensa según la cual la trayectoria de las postas que impactaron a la víctima serían de atrás hacia adelante debido a que Ettien Gutiérrez habría pasado desde atrás hacia adelante del J031, de poniente a oriente y en diagonal de sur a norte.



Señala que ello fue corroborado por la perito Ximena González Gálvez que dice que en lo balístico siempre se busca entender cómo es que llegan las postas, en qué dirección y sentido, pero que se corrobora después con la opinión médica, reproduce parte de lo que dijo la perito, en cuanto a que el disparo sería a corta distancia y luego la corroboración por las lesiones provocadas a la víctima, describiéndola. Concluye que la formulación que hace la sentencia, por mayoría, si bien sostiene la plausibilidad de la tesis de la defensa, aquello se basa en presupuestos fácticos erróneos que vulneran la razón suficiente y además da un valor exacerbado a sus dichos.

**58°)** Que en relación a la errada valoración del relato y credibilidad del acusado. Indica el recurrente que la sentencia en las páginas 211, 226, 242 y 322 sostuvo que la versión del acusado fue más plausible, por lo que para sustentar el error de valoración el recurrente alude al voto disidente que afirma que la versión del acusado no es plausible sino ontológicamente imposible y para ello reproduce el voto en las páginas 349 y siguientes donde se refiere a la detención de la víctima, del testigo y de Ricardo Díaz Avendaño por desórdenes públicos y no por robo en lugar no habitado cometido en el edificio consistorial; a los cambios de versión del acusado; a una conversación secreta del acusado con el mayor Cristóbal Rivera, en clave radial pidiendo a este último solicitar la concurrencia del Sprinter para trasladar a la víctima al SAR de la Pincoya en circunstancias que podía él al ser el oficial de mayor rango requerirlo directamente; a los protocolos enviados por el acusado al fiscal Fernando Ruiz y el que envió al fiscal administrativo; a que comunicó el hecho al fiscal cuatro horas después y al alto mando una hora y media después; a que si se trataba de un delito de desórdenes públicos por qué se



solicitó un asesor jurídico a la 54° Comisaría de Huechuraba; a la omisión de mencionar a los funcionarios Candia y Cancino al fiscal quienes formaban parte de la sección 19 y que durante la investigación indicaron un lugar y circunstancias de ocurrencias de los hechos distintas al acusado; que el acusado dijo que había lanzado una granada de mano en circunstancias que el testigo Brian Vidal reconoció que fue la sección 19 la que utilizó la granada de mano y que luego se inició una persecución de infantería a los manifestantes lo que concuerda con la declaración de la víctima y el testigo López y; que según el acusado reconoció a Ettien entre los sujetos que frente al forado lanzaban objetos contundente, sin embargo ello no tiene sustento en la prueba, aun cuando Ettien Gutiérrez reconoce que momento antes de los hechos lanzó objetos contundentes a los vehículos policiales, pero dice que lo hizo desde el bandejón central ubicado en la intersección de avenida El Bosque de Santiago con calle República de Estados Unidos.

Añade que la versión del acusado no es creíble porque en el parte policial no hay mención a que la víctima participara en el lanzamiento de objetos contundentes hacia los carros de la policía, tampoco se describen sus vestimentas y además la víctima vestía una bandana, aunado que en las intersecciones de calles citadas estaba sin luz por los apagones y los demás tripulantes del J031 afirmaron que no habían visto a Ettien cometiendo delito.

Alude al testimonio del carabinero Iván Vásquez Rojas, descartando la verosimilitud de su relato. Cita los elementos planimétricos confeccionados por el perito Iván Olivares que difieren de la realidad porque incluye una curva en calle Premio Nobel que no se aprecia en el mapa extraído de *google maps*.





Cuestiona que la sentencia haya desestimado la versión del perito pero sí haya dado valor al boceto copiado en la página 212 de la sentencia.

También se refiere a los testimonios de los funcionarios policiales quienes resultaron ser testigos hostiles lo que queda de manifiesto en la solemnidad y temor reverencial con la que se siguen refiriendo al acusado como “mi mayor Crespo”, “mi comandante Crespo”, así como los ejercicios de refrescar memoria y de evidenciar contradicciones demostrando los relatos contradictorios del juicio oral en relación a la investigación penal.

Finalmente, y siguiendo con el voto disidente alude a que el resultado del razonamiento podía ser de tres formas, las que cita y refiere que la versión del acusado no es posible pues las lesiones tienen una trayectoria de adelante hacia atrás y no de atrás hacia adelante como sería si la versión del acusado fuere cierta.

Por ello dice que la sentencia incurre en contradicciones internas, con déficit de fundamentación, infringiendo la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

**59°)** Que el recurso enseguida se refiere a la errada consideración de legítima defensa y dice que la sentencia la considera concurrente pero en abierta contradicción al elemento esencial de tipicidad. Señala que el fallo en su página 226 establece que el disparo se produjo de manera accidental, luego reproduce partes del fallo de las páginas 320 y 330, indicándose que no es posible comprender la circunstancia de legítima defensa puesto que el tribunal advierte que se trató de un accidente, incurriendo en una violación al principio de no contradicción.



**60°)** Por último el recurrente solicita la nulidad del juicio y de la sentencia y que se determine en qué estado debe quedar el procedimiento y ordenar la remisión de los autos a un tribunal no inhabilitado para que disponga la realización de un nuevo juicio.

**61°)** Que como puede verse, el recurso de este último querellante, se asila, al igual que los ya analizados, en una errónea apreciación de la prueba que, en su concepto habría hecho la sentencia, acusándola de sesgos hacia la víctima cuestión que habría incidido en la forma como se apreció la prueba, desatendiendo las contradicciones del material probatorio que impedían, según dice, asumir la plausibilidad de la versión del acusado, planteando que la forma en que debió analizarse la prueba fue la que hizo el juez disidente.

Pues bien, ha de observarse que gran parte del recurso reproduce la prueba con la que se intenta demostrar el yerro de la sentencia, invitando a que esta Corte “aprecie” cómo esa prueba debió imperar por sobre la restante, sin embargo ello no corresponde en un recurso de nulidad pues, es evidente que en un juicio existe una elevada probabilidad que se den pruebas contradictorias y que obliguen al tribunal a dar credibilidad a alguna por sobre la otra, sin que por seguir ese derrotero el razonamiento sea nulo; pues si se hubiese optado por la postura contraria, también entonces podría acusarse de nulidad por contradecir las pruebas desechadas. Por eso, el examen de nulidad es más exigente que el de mérito ya que incluso no compartiendo lo que se decide puede concluirse que la valoración realizada es válida.

Lo anterior pone de relieve entonces la necesidad de demostrar la transgresión a la sana crítica, dada la causal elegida para impugnar la sentencia, sin embargo tal finalidad no se



satisface con solo efectuar una comparación de razonamientos como aquí se hace entre la sentencia y la disidencia.

**62°)** Con todo ya se dijo a propósito del recurso del querellante que representa a la víctima, aceptando el error de citar como ganancia secundaria la intención de la víctima de lograr la condena del acusado y la del testigo de apoyar a su amigo y es más, eliminando tal argumentación, de todos modos la validez del fallo se mantiene y ello porque ninguna de las causales de nulidad invocadas por los recurrentes lograron demostrar la trascendencia de los eventuales vicios en el mayor obstáculo que encontró el tribunal de mayoría para condenar y que condujo a la absolución y fue cómo la versión de la víctima ya fuere ratificada por los peritos o por la trayectoria balística que mostraban sus lesiones no se ajustaba a las circunstancias fácticas que cada una de las acusaciones describió.

En el caso puntual del recurrente cuyo recurso se analiza, en su acusación reproducida en la sentencia en la página 13 en adelante, en lo pertinente dice:

*“Al comenzar a retirarse del lugar, específicamente en calle República de Panamá con Camino El Bosque, la víctima junto a un tercero, Nicolás López Hernández, observa un vehículo tipo “zorrillo” de carabineros cruzado en diagonal en la calzada (el que resulta ser el vehículo J-031), por lo que decide pasar corriendo por el lado derecho del referido móvil, y al llegar a la altura del tercio delantero del mismo, escucha un disparo en su cara, boca y cuello, el impacto de 11 de los 12 perdigones o postas contenidos en el cartucho utilizado por la aludida escopeta antidisturbios”, luego se añade “Este disparo, fue realizado por el imputado Claudio Fernando Crespo Guzmán desde la tronera ubicada en la*



*puerta del vehículo J-031, con vista, de acuerdo al ángulo de disparo, hacia el afectado”.*

El recurrente de nulidad, no da explicación a este problema, problema del cual el tribunal dejó expresa constancia (páginas 242 y 266) y que fueron las principales motivaciones para absolver, entonces ¿cómo podría tener destino anulatorio las versiones que en concepto del recurrente son las correctas si ellas no calzan con su acusación? Tampoco aquí nada se dice, salvo indicar, como se señaló en el considerando 57° respecto de lo que el recurrente reclamaba respecto de la trayectoria de las balas en cuanto a que debieron ser consideradas “para darle sentido a la dinámica de los hechos propuesta por los acusadores”, pero ese sentido no es cualquiera sino el que se propuso en el texto acusatorio.

Por ello el recurso en relación a la errada valoración de la prueba no puede prosperar.

**63°)** Que en cuanto a la infracción al principio de no contradicción relacionado con el tema de la legítima defensa, siendo ello similar al argumento que planteó el Ministerio Público, habrá también de ser descartado de acuerdo a lo que se señaló en los considerandos 6°) a 8°) que se dan por reproducidos.

En consecuencia, este recurso de nulidad será desechado.

## **V. Consideraciones finales**

**64°)** Que finalmente, como ha podido comprobarse, casi la totalidad de los recursos cuestionaron la valoración que la sentencia hizo de la prueba ofrecida en el juicio oral, verificándose que el tribunal decidió absolver por cuanto la prueba generó una duda razonable que le impidió adquirir la convicción necesaria para condenar.



**65°)** Que en el escenario descrito, esta Corte mediante el control que le correspondió hacer en un contexto de nulidad –y no de mérito- pudo comprobar que la decisión absolutoria por duda razonable no infringió las reglas de la sana crítica, ni tampoco dejó de ponderar prueba que, dentro de los parámetros de las acusaciones, pudiera eliminar esa duda.

Por todas estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 384 del Código Procesal Penal **se rechazan los recursos de nulidad** deducidos por el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, el querellante que representa a la víctima; y el Instituto Nacional de Derechos Humanos en contra de la sentencia de diecisiete de julio de dos mil veinticuatro dictada en los autos RIT 461-2023 del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.

Redactó la ministra Mireya López Miranda.

No firma el Ministro (S) señor Rodríguez Vega, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber terminado su suplencia.

**N°Penal-4407-2024.**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XUXEXQVMSSX

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mireya Eugenia López M., Maria Paula Merino V. Santiago, veintitres de septiembre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a veintitres de septiembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

